

Banco Español de San Fernando

**Esposicion documentada que dirige a S.M., la
Junta de Gobierno del Banco Español de San
Fernando con motivo de la ereccion del de Isabel II
...**

Madrid : Imprenta y Fundicion de D. E. Aguado, 1844.

Vol. encuadernado con 15 obras

Signatura: FEV-AV-M-04665 (3)

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente

EXPOSICION

DOCUMENTADA

QUE DIRIGE A S. M.

la Junta de Gobierno

DEL BANCO ESPAÑOL

de San Fernando

*con motivo de la ereccion del de Isabel II, autorizada por
Real decreto de 25 de enero de 1844.*



MADRID:

IMPRENTA Y FUNDICION DE D. EUSEBIO AGUADO.

1844.

EXPOSICION

DOCUMENTADA

OFICINA DE REPOSICION DE MONEDAS Y METALLES

la Junta de Gobierno

DEL BANCO ESPAÑOL

de San Fernando

con motivo de la reunion del Sr. D. Manuel de Arce, Ministro de Hacienda, por
Real Decreto de 25 de Mayo de 1855.



IMPRESA

IMPRESA Y DISTRIBUCION DE LA RESERVA AGUADA

Señora.:

La Junta de gobierno del Banco Español de San Fernando, que puesta al frente de su administracion tiene el imprescindible deber de velar por los intereses y defender los derechos de este brillante y grandioso establecimiento, erigido para bien del pais por el augusto padre de V. M., se ve obligada á molestar de nuevo su soberana atencion, para esponerle con el mas profundo respeto el enorme agravio que al Banco causan las disposiciones que para la creacion de uno nuevo en esta corte, con la denominacion de Isabel II, se han adoptado por real decreto de 25 de enero último, y por los estatutos aprobados en la misma fecha, y con especialidad la contenida en el artículo 6.º de los tales estatutos.

Ya al recibir por el rumor público la primera noticia de haberse acordado en Consejo de Ministros esas medi-

*

das, se apresuró la Junta á acudir á V. M. con una reverente protesta (*), en la cual suplicaba que antes de consumir la resoluzion se la oyera, comunicándole al efecto las bases sobre que se intentase constituir el nuevo Banco, como imperiosamente y de consuno parecian exi-

(*) Con fecha 26 de enero anterior se elevó á S. M. por la Junta de gobierno del Banco Español de San Fernando la esposicion siguiente. — Señora. — La Junta de gobierno del Banco Español de San Fernando, sorprendida con la noticia que como positiva circula por el público de esta capital, de haberse concedido por el Gobierno la autorizacion para crear un nuevo establecimiento de la misma especie del que representa, acude presurosa á los pies del Trono, esponiendo á V. M. con el mas profundo respeto, que semejante autorizacion lastima grandemente los intereses y derechos de este Banco (harto digno de proteccion y miramiento por su origen y por todas sus circunstancias), si se ha acordado en los términos que generalmente se asegura.

No siendo todavia conocidas con exactitud las bases sobre que ha de erigirse el nuevo establecimiento, no puede la Junta de gobierno saber hasta dónde llega la herida que con su creacion se abriria en el corazon del antiguo. Pero si es cierto, Señora, como lo parece, que el Gobierno de V. M. se ha decidido á conceder á aquél la facultad de emitir billetes pagaderos á la vista al portador, con esto solo bastará para que cause un perjuicio considerabilísimo á los intereses y derechos del existente. Esa facultad le está otorgada á él con calidad de *privativa* por el artículo 5.º de la real cédula de creacion del mismo, espedita por el augusto padre de V. M. con fecha de 9 de julio de 1829; real cédula que es una verdadera ley, cuya derogacion no está al alcance de las atribuciones que la constitucion señala al poder ejecutivo; y real cédula que, por los antecedentes que la motivaron y por la compensacion que hace de ventajas y gravámenes para el Banco, envuelve un contrato bilateral y oneroso, cuya alteracion no puede verificarse durante los 30 años en él estipulados sin consentimiento reciproco de las partes que lo celebraron, so pena de faltar abiertamente á los mas esenciales y notorios principios de justicia. El autorizar, pues, la emision de billetes por otro Banco que el actual, sería despojar á este de su facultad privativa, con patente infraccion de una ley y de un contrato, y con menosprecio del derecho sagrado de propiedad, cuya proteccion, Señora, es el primer deber de los Gobiernos, asi como es la necesidad primera para las sociedades.

En fuerza de estas consideraciones, que la Junta espera serán apreciadas por la suprema ilustracion de V. M. en todo su valor, se apresura á elevar esta reverente protesta.

Suplicando á V. M., que si en efecto se hubiese acordado la autorizacion para crear un nuevo Banco en la forma que generalmente se asegura, tenga la dignacion de mandar que se suspenda la ejecucion y publicacion de la medida, y se comuniquen sus bases á esta Junta para oirla sobre ellas antes de adoptar una resoluzion definitiva, como lo exige la justicia y parecen reclamarlo tambien los repetidos y no pequeños servicios prestados al Trono y al Estado por el establecimiento en recientes y bien difíciles circunstancias. Asi lo espera de la notoria justificacion de V. M., cuya vida conserve el cielo dilatados años. Madrid 26 de enero de 1844. — Señora. — A. L. R. P. de V. M. — *El Marqués de Casa-Irujo*.

jirlo la equidad y la justicia. Guiada por los mismos principios que la inspiraron aquella protesta, no habria titubeado ni un instante esta corporacion en reproducirlas, esplanando mas y mas sus incontrastables y bien óbvios fundamentos, apenas tuvo el pesar de ver realizados sus temores por la publicacion hecha en la Gaceta del 30 del propio enero de los citados real decreto y estatutos, si el acatamiento reverencial con que mira todas las determinaciones emanadas del Trono, y la importancia y trascendencia inmensa del asunto á que esas se refieren, no la hubiesen contenido, impulsándola á obrar con madura y detenida reflexion, y aun á buscar la norma de su conducta en la opinion de jurisconsultos de notoria ilustracion y reconocido crédito. Consultó, pñes, á los seis cuyas firmas se leen al pie del dictamen que original acompaña á esta esposicion, señalado con el número 1.º; y habiendo adquirido, en fuerza de las luminosas á par que poderosísimas y aun irresistibles consideraciones jurídicas que en el propio dictamen se consignan, un convencimiento todavía mas íntimo y seguro que el que al principio tenia del derecho que al Banco de San Fernando asiste, y de la obligacion indeclinable en que su administracion está de reclamar contra las disposiciones dictadas para la creacion del nuevo de Isabel II, en cuanto perjudican y destruyen las prerogativas por el primero adquiridas á virtud de una ley, y hasta por un solemne contrato bilateral y oneroso, no puede ya dejar de hacerlo por todos los medios legales y lícitos que estuviesen á su alcance.

Sensible en extremo es, Señora, á la Junta del Banco, que dirigiendo un establecimiento verdaderamente nacio-

nal, ha puesto en todos tiempos y ocasiones un especial esmero en auxiliar al Gobierno, y ocurrir del modo que le ha permitido la posibilidad al socorro y satisfaccion de las necesidades del Estado, haber de combatir medidas que sin duda se han creido en sumo grado convenientes al bien general, y que solo por considerarse asi han sido acaso adoptadas, por un exceso de celo, con menos examen y deliberacion del que por su misma índole y naturaleza requieren. La Junta hace á los consejeros responsables de V. M. la justicia de reconocer que han procedido en este gravísimo asunto con laudables intenciones. Preocupados con la idea de que la ereccion de un nuevo Banco de descuentos, préstamos, giros y depósitos en esta corte proporcionaria un beneficio incalculable al comercio y á la industria, no titubearon, como en la esposicion que precede al real decreto de 25 de enero se confiesa, en acoger desde luego el proyecto presentado á ese fin por algunas casas respetables de la capital, y se decidieron casi instantáneamente á proponer á V. M. su adopcion. Quizá, y aun sin quizá, no hubieran opinado por ella los mismos que tan ventajosa la han estimado, si el espediente hubiese recibido antes de resolverse la instruccion que, no ya á los de su clase sino hasta á otros de importancia y gravedad infinitamente menores se acostumbra siempre dar por el Gobierno, y sobre todo si se hubiese concedido, cual era natural é indispensable, al Banco de San Fernando la audiencia prévia, que ni la razon ni la ley permiten nunca se niegue á la corporacion ó persona interesada, cuyos derechos pueden lastimarse en una determinacion de esa especie. Porque no todo lo

que á primera vista parece bueno y útil lo es en realidad ; ni todo lo que efectivamente puede ser y es bajo algunos aspectos ventajoso , es tambien aceptable y hacedero en todas ocasiones. Ocúltase muchas veces un gran daño donde no se cree haber sino bien ; y muchas otras aunque hasta cierto punto haya conveniencia , se hace preciso renunciar á ella por no ofender á la justicia , cuyos fueros, Señora , no pueden menos de ser para el Gobierno de V. M. , como lo son para todo Gobierno recto é ilustrado , sagrados é inatacables en cualesquiera momentos y circunstancias.

La Junta está íntimamente persuadida de que las medidas que motivan su reclamacion son hijas de una sorpresa producida por apariencias seductoras.

Cierto es que entre los medios mas á propósito para promover y fomentar la prosperidad de un Estado, merecen colocarse en primer lugar, como á V. M. ha dicho su ministro de hacienda en la esposicion arriba enunciada, las instituciones de crédito, que multiplicando los instrumentos de cambio y facilitando la circulacion, forman la palanca mas fuerte de aquella prosperidad y contribuyen eficazmente á su desarrollo. Y cierto es asimismo que, cual igualmente se ha asentado en esa esposicion, todas las naciones de Europa, y con especialidad las que marchan á la cabeza de las demás en los progresos mercantiles é industriales, tienen establecidos hace tiempo, ó van estableciendo Bancos, ya de depósitos, ya de descuentos, ya de giro y circulacion, ya de todas estas operaciones á la par, de los cuales recogen diariamente abundantes y ópimos frutos. Mas no por eso es exacto, en concepto de la Junta, que

el establecimiento de los tales Bancos pueda y deba favorecerse del modo y por el camino que parece haber creído y haberse abierto el Gobierno; ni menos lo es que la esperiencia haya demostrado la utilidad y ventajas de la coexistencia en un país de dos ó mas de ellos, revestidos del caracter y prerogativas de nacionales. Muchos son los Bancos que hay en los tres reinos que constituyen el imperio británico; pero de Inglaterra no existe allí mas que un Banco, como tampoco en Francia hay de Francia mas que uno, aun cuando se cuenten no pocos particulares, y aun algunos departamentales ó de determinados distritos, cual en aquel otro país, en la nacion francesa. Ni en esos dos pueblos, que seguramente son los que marchan al frente de los demás de Europa en los progresos industriales y mercantiles, ni en los mas de los otros que siguen sus huellas, se ha pensado nunca que podian existir dos ó mas Bancos igualmente privilegiados, dos ó mas establecimientos que, destinados por la ley de su ereccion á servir de principal palanca al crédito, gozaran de iguales derechos y facultades, y pudieran, como dos rivales colocados el uno en frente del otro, hacerse esa concurrencia que el Gobierno de V. M. califica de oportuna y ventajosa. Y mucho menos se ha creído jamás en Inglaterra, en Francia ni en ninguna otra nacion civilizada, por mas grande que haya sido el desarrollo de su comercio y de su industria, y por mas riesgos que haya podido haber de que á la sombra del monopolio se introduzcan abusos en la administracion de sus Bancos nacionales y en la direccion dada á las operaciones de los mismos, que durante el periodo de años fijado en las respectivas concesiones para el disfrute esclusivo de sus privilegios, de

ban ni puedan estos menospreciarse y destruirse, ó lastimarse siquiera, acordando otros iguales ó superiores á otros Bancos nuevos.

Cuando ha llegado el tiempo ó la ocasion de revisar las tales concesiones, se han ratificado sin alteracion, si asi se ha estimado conveniente, ó se han modificado y reformado en aquello que la esperiencia ha hecho ver era defectuoso y necesitaba mejora. Pero mientras las concesiones han estado vigentes por no haber espirado el término de su duracion, ó no haberse verificado un caso que legalmente permita rectificarlas, se han respetado con escrupulosa religiosidad, y se los ha sostenido contra toda clase de ataques. Porque ni es destruyendo ó esponiéndose siquiera á que se desmorone ó arruine un establecimiento util y próspero (aunque sea con el objeto de crear á su lado otro mejor, que podrá despues corresponder ó no á las esperanzas concebidas al erigirlo) como se consulta el verdadero interés del Estado, mayormente tratándose de instituciones mercantiles y de crédito, que en tanto pueden adquirir este en cuanto inspiren confianza, y en tanto pueden inspirarla en cuanto ofrezcan garantías eficaces y duraderas, y plena y efectiva seguridad para los capitales en ellas invertidos; ni se concibe tampoco que sea hollando ó lastimando los derechos legítimamente adquiridos por los imponentes de esos capitales y fundadores de los Bancos existentes, como pueda procurarse (por ventajas que presente la constitucion de otros nuevos) la bien entendida conveniencia pública, cuando se sabe que su primer elemento y su condicion mas precisa es la justicia, con cuyas rigurosas é inflexibles prescripciones nunca se

compadece la ofensa y menosprecio de aquellos derechos.

Estas son, Señora, las doctrinas que en las naciones cultas de la Europa y del mundo dominan; y si algunas de ellas las han abandonado ú olvidado alguna vez, bien pronto ha venido á desengañarlas de su error con severas lecciones la experiencia. Contra tales doctrinas peca sin embargo abiertamente el proyecto de la creacion del nuevo Banco de Isabel II, con tanta facilidad y tan singular aplauso acogido por el Gobierno de V. M.

Y pecaria, mediante lo que queda manifestado, aun cuando fuera exacto, como se ha creído y se asienta en la ya citada esposicion del ministerio de hacienda, que el de San Fernando no ha correspondido del todo á las esperanzas que se concibieron al fundarlo, y que en su estado actual no basta por sí solo á cubrir las necesidades de la industria y del comercio.

No hay por fortuna exactitud en semejante asercion; y deber es, Señora, de la Junta no dejarla pasar sin la rectificacion conveniente. El Banco Español de San Fernando ha hecho en favor del comercio y de la industria cuanto ha podido hacer, y cuanto era dado esperar de él y pedirle en los calamitosos tiempos que hemos atravesado. El Gobierno mismo reconoce que este Banco ha gozado de una prosperidad cada vez mayor, y de un crédito siempre creciente; y esto, que en cualquiera circunstancia sería de suyo y por sí solo un bien inapreciable é inmenso para el país á que pertenece el Establecimiento, lo es mayor y mas digno de estima en épocas como la próximamente pasada y la presente. Y lo es, no solo por las ventajas reales y bien

grandes que al pro comun reporta, sino tambien por las mas importantes todavia que para lo sucesivo presenta.

Ese hecho prueba además, y no como quiera sino irreplicablemente, los esfuerzos y afanes con que el Banco ha procurado corresponder á su objeto; porque nunca, y menos en circunstancias afflictivas y en sumo grado peligrosas, se consiguen resultados semejantes sin especular mucho, y realizar numerosas y no mal combinadas operaciones.

Y merece, Señora, notarse para honra de las administraciones anteriores de este Establecimiento nacional, que ha sido precisamente en los tiempos mas dificiles cuando mas han tenido que trabajar y mas han trabajado en efecto para elevarlo á la altura en que se encuentra. Fundado por el augusto padre de V. M. á mediados de 1829 sobre los restos del antiguo Banco de San Carlos, poco pudo hacer el de San Fernando antes de que estallase la terrible guerra civil que por tantos años ha afligido y destrozado nuestra patria. Hijo de un establecimiento que perecia con pérdida de las cuatro quintas partes de su capital, mal habia de adquirir en un corto periodo el crédito y la confianza que son el alma de estas instituciones, y que no se conquistan sino á costa de penosos y largos esfuerzos. Faltáronle, pues, al Banco de San Fernando en sus primeros tiempos ocasiones y objetos en que emplear los 40 millones que constituían su fondo capital; y no fue sino con sumo trabajo y con singular y asiduo esmero como pudo lograrse que á fin de 1832 estuvieran en movimiento tal, que hubiese ya producido utilidades suficientes para repartir, cual se repartió á los accionistas, un dividendo de 18 por 100, que correspon-

dia al 6 por cada uno de los tres años hasta entonces transcurridos.

En aquella época se hallaba el Banco en tanto grado dispuesto á responder completamente á los fines de su institucion, que en la primera junta general de accionistas celebrada en 1.º de febrero de 1833, tomó él mismo la iniciativa para suplicar á su escelso fundador que se ensanchara el círculo trazado por la real cédula de ereccion á sus operaciones, en beneficio del comercio y del Estado. Con este propósito pidió al augusto padre de V. M. que se dignara resolver, como resolvió en efecto, 1.º que los depósitos voluntarios que se constituyeran en el Banco fuesen enteramente gratuitos, quedando reformado el artículo 34 de la espresada real cédula que los gravaba con una retribucion de dos al millar por cada semestre; 2.º que el Banco pudiera hacer préstamos sobre las dos terceras partes del valor que los efectos públicos tuvieran en la Bolsa en el dia en que se celebrase el contrato, reintegrables á los noventa dias, con solo la próroga de otros noventa y con el premio que la Junta de gobierno hubiese fijado aquel mes por los descuentos de letras; 3.º que igualmente pudiese hacer préstamos bajo las propias reglas y condiciones sobre las tres cuartas partes del valor que las acciones del Banco tuvieran tambien en la Bolsa; 4.º que asimismo pudiera formalizar con la Caja de amortizacion los convenios que estimara necesarios y útiles para prestarse recíprocos auxilios, hasta la cantidad que la Junta de gobierno determinara y permitiese la posibilidad, atendidos sus recursos y obligaciones; y 5.º en fin, que el Banco estuviese facultado para negociar por medio de su Direccion en efectos

públicos del Estado dentro del reino hasta la cantidad que asignase la misma Junta.

Así, con estos actos tan significativos y explícitos demostró el Banco en 1833 su deseo de ser útil al comercio y al Estado, aumentando los medios de proporcionar auxilios al uno y al otro. Pero pasó por desgracia bien poco tiempo sin que la desastrosa guerra civil y los trastornos políticos vinieran á desorganizar la administracion pública, á paralizar todas las empresas mercantiles é industriales, y á poner en riesgo todas las fortunas. Uno de los primeros y mas inevitables efectos de esta triste situacion fue el de hacer retirar de la circulacion los capitales, que antes que nada buscan siempre la seguridad y la paz. Disminuyóse pues estraordinariamente el numerario, y el interés del dinero subió como era preciso que subiese. El Banco no podia remediar este mal, harto superior á sus fuerzas; pero podia contribuir á atenuarlo, y hasta donde sus medios alcanzaron contribuyó á ello.

Severo y aun inflexible cual debia y debe serlo siempre, pero con especialidad entonces, en la observancia de su ley y reglamentos en cuanto á las garantías que exijia á los establecimientos ó personas á quienes auxiliaba, no alteró por lo demás su marcha; nunca acrecentó el rédito de sus préstamos, que constantemente ha sido el legal de 6 por 100 al año; no cercenó jamás la cantidad destinada á ellos, ni tampoco la aplicada á descuentos, cuyos precios mantuvo el curso mas equitativo posible; ni en sus otras operaciones desatendió la conveniencia general del comercio. Lejos de ello, aun en medio de tantas calamidades como sobre el pais llovian, y á pesar de la inseguridad que

ofrecia todo en aquel torbellino de convulsiones que sin cesar se sucedian las unas á las otras, buscó en el aumento dado con la autorizacion competente á la emision de billetes, nuevos recursos con que atender á las necesidades de la industria y del tráfico, y mas especialmente todavia á las apremiantes y perentorias del servicio público.

Obligado el Banco por prescripcion espresa de su cédula á hacer con el Tesoro, con el Real Giro y con la Caja nacional de amortizacion las negociaciones en que convinieran los gefes de estas dependencias y la administracion de aquel, se veia cada dia y á cada paso ostigado por el Gobierno para el suministro de fondos, que con tanta urgencia reclamaban las imperiosas obligaciones del Erario, y muy particularmente las atenciones de la guerra. La administracion del Banco, compuesta de españoles leales y, como los que mas, interesados en el triunfo de la causa del trono y de la patria, no podia menos de ocurrir con mano generosa al socorro que se le demandaba, y nunca, en ninguna ocasion, por crítica y apurada que fuese dejó de hacerlo hasta donde se lo permitieron sus propios recursos. Todos ellos y cuantos mas era capaz de producir al Banco su bien asentado y grande crédito, hubieran sido insuficientes para satisfacer completamente los pedidos incesantes del Gobierno. Asi es que el establecimiento ha tenido siempre y tiene hoy mismo ligada su suerte á la del crédito nacional. ¡Y se dice todavia que no ha correspondido á las esperanzas que se concibieron al fundarlo!

¿Qué mas ha podido hacer, Señora, de lo que ha hecho? ¿Qué auxilios ha podido prestar al Estado en general, y en particular á la industria y al comercio, que no les

haya prestado con oportunidad y con largueza? Si durante las calamitosas circunstancias por que hemos pasado hubiera sido posible que el movimiento industrial y mercantil recibiese el impulso y desarrollo que solo cabe esperar en el seno de la paz, entonces seguramente el Banco de San Fernando, cuyos capitales se hallaban dedicados en su mayor parte á préstamos y anticipaciones exigidas por el Gobierno, no habria estado en disposicion de satisfacer cumplidamente aquel otro género de necesidades; pero como mientras ardía la funesta hoguera de la civil discordia las especulaciones no podian tener, ni de hecho han tenido, sino un progreso bien lento, ha faltado absolutamente la ocasion de que se resientan por la mayor ó menor abundancia de recursos destinados á ofrecerles auxilios y facilidades.

Despues de la guerra sobrevinieron, unos en pos de otros, nuevos trastornos políticos, y hoy es el dia en que, aun cuando puedan, como por fortuna pueden, formarse bien fundadas y halagüeñas esperanzas de conseguir pronto, bajo el benigno y maternal cetro de V. M., la paz y la reconciliacion de todos los españoles, todavia sin embargo no se ha logrado realizar tan inmenso beneficio. En esta situacion aún no es posible que la industria y el comercio obtengan todo su desarrollo. Han recibido, sí, un grande impulso, y el Banco á su vez ha procurado seguirles en su incremento. De dia en dia ha ido este ensanchando el círculo de sus operaciones, y á medida que se han aumentado las demandas de auxilios, se han aumentado tambien los auxilios mismos.

Nunca, Señora (la Junta se atreve á asegurarlo á V. M.

sin temor de poder ser desmentida), nunca ha pasado por la imaginacion de los que tienen la honra de hallarse al frente de la administracion del Banco la idea de ejercer un monopolio perjudicial á los intereses públicos, ni la de preferir ganar mucho especulando poco, ó realizar beneficios de mayor consideracion ensanchando el ámbito de su actividad y movimiento. Ahí están, Señora, á disposicion de los agentes ó representantes que el Gobierno de V. M. tiene en el Banco, sus libros, sus cuentas y sus balances. Que los examinen, y verán como ni ahora ni en otro ningun tiempo ha presidido á las operaciones del establecimiento sino un designio diametralmente opuesto al que acaba de indicarse, esto es, el designio de emplear y mantener en constante movimiento los capitales de la manera mas propia para llenar los fines de una institucion de esta especie, á saber: para hacerlos productivos con las mayores ventajas posibles para las clases todas de la sociedad.

Que no se acuse, pues, al Banco de monopolista, ni se le reconvenga de haber estrechado el círculo natural de sus operaciones, y haber dejado con ello de corresponder al objeto noble y grandioso de su institucion, por ceder la preferencia á miras egoistas y mezquinas. Tales imputaciones serian, Señora, injustísimas.

Bien pudiera suceder, no obstante, que sin culpa del establecimiento ni de su administracion, y por causas independientes de la voluntad del uno y de la otra, no bastase por sí el primero en su actual estado para satisfacer al presente las necesidades del comercio y de la industria, como en la esposicion de vuestro ministro de hacien-

da se asegura. La Junta de gobierno del Banco, á quien naturalmente debian haber llegado antes de elevarse al Trono los clamores que por precision habia de haber escitado con bastante generalidad y por espacio de no poco tiempo la no satisfaccion de esas necesidades, en el caso de ser ellas tales cuales se pintan, puede afirmar ante V. M. que hasta ahora no ha tenido noticia de semejantes clamores, y que si la hubiese tenido, se hubiera apresurado á acallarlos hasta donde hubiere alcanzado su posibilidad.

Pero supóngase en buen hora cierto ese dato, que sirve de fundamento capital á la medida de ereccion del nuevo Banco; ¿deberia, aun bajo tal hipótesi, haberse adoptado semejante medida, mayormente cuando para adoptarla era preciso romper, cual se ha roto, la ley y el contrato en cuya virtud existe el Banco Español de San Fernando? ¿Habria, no ya legalidad ni justicia, sino ni siquiera conveniencia en una resolucion de esta especie? La Junta cree, Señora, sinceramente que no.

No habria conveniencia en crear un nuevo Banco al lado del nacional que existe, porque de esta clase nunca conviene que haya ni debe haber mas que uno; y porque cualesquiera que sean los defectos ó vicios del existente, pueden muy bien remediarse sin faltar á ese principio de unidad, y sin lastimar en lo mas mínimo derechos legítimamente adquiridos y en alto grado respetables.

Para la completa demostracion de esta importante verdad, la Junta consignará aqui lo que á los consejeros de V. M. manifestó ya de palabra, por medio de la co-

mision de su seno que puso en mano de los mismos la reverente protesta del 26 de enero. De dos causas solas podrian proceder los vicios ó defectos que impidiesen al Banco Español de San Fernando, en su estado áctual, satisfacer cumplidamente las necesidades de la industria y del comercio, á saber: ó de abusos en su administracion introducidos, ó de la insuficiencia del capital que maneja y de las bases sobre que está fundado el establecimiento. Pues bien, en cualquiera de los dos casos será posible y aun facil remediar el mal si realmente existiese, sin tener que apelar para ello al peligroso y nada legal recurso de la instalacion de un nuevo Banco, cuyo carácter y privilegios lastimen los de que aquel disfruta con los mas legítimos títulos.

En el primero de esos casos, es decir, en el de que el no llenar enteramente su objeto el establecimiento proviniere de abusos introducidos en su administracion, nadie podria hacer desaparecer tales abusos, y con ellos sus funestos resultados, mejor ni mas pronto que el Gobierno mismo de V. M., que por medio de sus agentes especiales ejerce sobre el Banco una continúa é inmediata inspeccion y vigilancia, y que todos los dias y á todas horas puede disponer lo conveniente para que se observen con la mas escrupulosa religiosidad las reglas establecidas en la real cédula de ereccion y en el reglamento.

Y en el segundo, esto es, en el caso de que el mal que se supone existir dimanára de la insuficiencia del capital del Banco, ó de las bases sobre que tuvo á bien organizarlo en 1829 el escelso padre de V. M., no sería tampoco mas difícil su remedio. Aun sin salir de los lí-

mites fijados en la precitada real cédula de erección, podrían aumentarse mucho, si conviniese, los recursos pecuniarios del establecimiento. Hasta 60 millones de reales, representados por 30.000 acciones de á 2.000 reales cada una, pueden constituir su fondo capital segun el artículo 14 de dicha real cédula; al presente sin embargo lo constituyen solo los 40 millones que se dieron por el Estado al Banco de San Carlos al tiempo de la transaccion de sus créditos y reclamaciones, y que conforme á condicion espresa de la misma transaccion, y al precepto terminante del artículo 16 de la propia cédula, se invirtieron en las 20.000 acciones distribuidas entre los accionistas del antiguo Banco. Las 10.000 acciones que restan hasta el completo de las 30.000, y cuya emision no se ha hecho hasta ahora por no haber habido necesidad de incremento alguno de fondos, podrían, pues, emitirse, y se emitirían al curso corriente, en cuanto se sintiera esa necesidad; y sin dificultad alguna se hubieran ofrecido y se ofrecerían á esas casas respetables que han solicitado la instalacion del nuevo Banco, y á cualesquiera otras que las demandaran en el caso propuesto. Y mas aún podría hacerse en ese caso para allegar fondos, tambien sin traspasar las lindes demarcadas por la real cédula, pues los 24 millones que en billetes del Banco (tanto ó mas estimados por el público que el oro) circulan en Madrid, podrían aumentarse bastante sin necesidad de que llegaran á representar el duplo del numerario efectivo del establecimiento; cosa harto peligrosa, Señora, y que nunca pretenderia para el Banco de San Fernando su Junta de gobierno, como para el de Isabel II han pretendido

los autores del proyecto de su ereccion, y han conseguido del Gobierno de V. M.

Pero todavia, hasta en el caso de que esos medios, y otros que igualmente se podrian adoptar sin alteracion alguna de las bases actuales de este establecimiento, no bastaran para el objeto arriba indicado, habria el de ensanchar esas mismas bases hasta donde fuera posible y útil, haciéndolo del modo y en los términos que corresponde, esto es, por un nuevo contrato que entre el Estado y el Banco se celebrase, y por una ley que lo sancionara, é imprimiera sobre él el sello de estabilidad y duracion que solo pueden dar en estas materias la legalidad y la justicia.

El Banco, Señora (díguese V. M. tenerlo muy presente en su alta consideracion), si bien está resuelto á defender, y defenderá mientras pueda, sus legítimos derechos, que ciertamente no pugnan ni nunca han pugnado con los derechos ni con los intereses del público, se halla y se hallará siempre dispuesto á hacer cuanto á su alcance estuviese en beneficio general, y á consentir en cuantas reformas y ensanches se intenten de una manera legal, y puedan conducir á ponerlo en situacion de llenar en todos tiempos y circunstancias el grande objeto de su instituto.

Por eso le duele mas que el Gobierno de V. M. no le oyese antes de acordar, ni se aprovechara de esa disposicion que desde el primer momento se le manifestó antes de publicar las medidas relativas á la instalacion del nuevo Banco; medidas en las cuales, si no se engaña mucho esta Junta, no ha sido aquel mas feliz para consultar la verda-

dera conveniencia pública, que para respetar (cual sin duda habrá querido hacerlo) los sacrosantos fueros de la justicia.

No bastaba en verdad, Señora, para que los consejeros responsables de V. M. hubieran podido decidirse, como se decidieron, á acoger favorablemente el proyecto de instalacion del nuevo Banco y proponer al Trono su aprobacion, que se convenciesen de lo ventajoso de la idea para la industria y el comercio, y aun para el Estado en general. Menester era además que se persuadiesen igualmente de que estaba en sus facultades el hacerlo, y sobre todo de que haciéndolo no ofendian á la justicia. Porque á esta debe siempre respetarla, segun ya se ha dicho, todo Gobierno; y aun en los casos en que ella no se lastima, no es dado sin embargo á los ministros de la corona adoptar ni aconsejarle que adopte por sí medidas que exigen el concurso de otros poderes públicos, cuando, como entre nosotros sucede, es la division de los poderes del Estado un principio fundamental de la constitucion de la monarquía.

Pues bien; la ereccion del nuevo Banco de Isabel II, conveniente ó inconveniente, necesaria ó innecesaria, no podia decretarse en los términos y con los privilegios con que se ha decretado sino por V. M. con las Cortes del reino, aunque no ofendiese en lo mas mínimo los derechos adquiridos por el Banco Español de San Fernando; y lastimándolos, como de hecho y bien profundamente los lastima, no podia tampoco ni aun por una ley aprobada por el Senado y el Congreso y sancionada por V. M., acordarse, so pena de haberse de faltar abiertamente á la justicia

sino otorgando de antemano al establecimiento interesado una competente y efectiva indemnizacion.

Estas verdades, Señora, se hallan desenvueltas con tanta claridad, y con tanta copia de razones jurídicas aparecen demostradas en el dictamen de los letrados consultados por la Junta, que con remitirse á él habria hecho esta lo bastante para darlas por patentizadas. Dígnese, sin embargo, V. M. permitirle que, en obsequio á la importancia del asunto, recuerde ligeramente algunas de aquellas reflexiones, y aun esplane y esfuerce con no despreciables datos otras de las mas capitales.

Que un Banco nacional no puede establecerse sino por una ley parece tan evidente, como lo es el que para crear los que no tengan ese carácter y se reduzcan á simples empresas particulares, no debe intervenir directamente la autoridad del Gobierno. La legislacion mercantil está muy clara y terminante en este punto. Una mera escritura de sociedad registrada y publicada en la forma que previene el Código, basta para constituir los Bancos de esa última especie, como no sean anónimas las compañías que los formen; y cuando lo fueren, al Tribunal de comercio y no al Gobierno, es á quien toca segun el propio Código examinar y aprobar sus estatutos y reglamentos. Para que el Gobierno haya de ejercer conforme al mismo esta facultad, se necesita que la sociedad anónima obtenga y deba disfrutar algun privilegio. Pero para que disfrute alguno que la exima de las cargas generales ó le conceda especiales derechos, es menester tambien que se le haya otorgado por una ley.

Por aqui, por la consecucion de esta ley, debia haber

empezado la sociedad anónima mercantil que para crear el nuevo Banco de Isabel II se constituye por el artículo 1.º de los estatutos aprobados en 25 de enero, si queria gozar legítimamente del privilegio consignado en el artículo 6.º de los mismos. Atribúyese en él al Banco proyectado la facultad de emitir y poner en circulacion, hasta en cantidad que represente un valor duplo de su numerario efectivo, cédulas al portador pagaderas á su presentacion en la Caja de Madrid; y esta facultad que, segun el lugar y los términos en que está espresado, mas bien que una especial concesion parece un simple natural derecho de la sociedad misma, es sin embargo, Señora, un verdadero y muy importante y trascendental privilegio, un privilegio que nadie sino V. M. con las Cortes puede conceder con arreglo á la constitucion del Estado, porque envuelve la relajacion ó dispensa de dos leyes que abiertamente lo repugnan.

Las cédulas al portador que el nuevo Banco emitiese á virtud de semejante facultad, serian documentos de giro sujetos al impuesto del sello establecido por las Cortes de acuerdo con la Corona, y ó habrian de estenderse en el papel sellado correspondiente (lo cual seguramente no entra en las intenciones de los fundadores del tal Banco), ó habrian de considerarse exentas de ese impuesto. ¿Y cómo sino por una ley puede concederse una exencion de esta especie?

Las cédulas además no pueden ser otra cosa que pagarés en favor del portador, sin espresion de persona determinada, de cuyos documentos dice terminantemente el artículo 571 del Código de comercio que *no producen*

obligacion civil ni accion en juicio. Luego ó no han de representar ni valer nada las tales cédulas, ó para que algo valgan y representen se ha de entender derogada respecto á ellas esa tan esplicita y decisiva disposicion legal. ¿Y á quién es dado derogarla, no siendo á V. M. con las Cortes, en quienes esclusivamente reside, segun la Constitucion, la potestad legislativa?

Gravísimos inconvenientes habrian de nacer de aqui para el establecimiento mismo cuya ereccion se intenta, y mas particularmente aún para el público que recibiera las cédulas, como en el dictamen de los letrados consultados por el Banco se demuestra con luminosas é incontestables reflexiones.

Pero no son esos inconvenientes, Señora, los que mueven á esta Junta á molestar con su queja la suprema atencion de V. M.; otros hay todavia cuya indicacion le incumbe mas hacer, y de los cuales dimana precisamente su actual reclamacion.

Cualesquiera que fuesen los vicios, ya económicos ya legales, de que pudiera adolecer en su origen el nuevo Banco de Isabel II, el Español de San Fernando se habria abstenido y se abstendria de combatir su ereccion, si al hacerla no se hubiesen ofendido sus propios derechos de un modo tan importante y esencial como vienen á ofenderse por el precitado artículo 6.º de los estatutos. Pero la facultad de emitir cédulas al portador pagaderas en Madrid, que por ese artículo se concede al establecimiento de cuya instalacion se trata, destruye un privilegio que el de San Fernando goza, adquirido por los mas legítimos títulos, que forma una parte de su propiedad, y de cuyo

disfrute y posesion no puede ser despojado sin la mas evidente injusticia mientras no trascurren los 30 años por que le fue otorgado.

Cuando el augusto padre de V. M., ejerciendo de lleno el supremo poder como único legislador entonces reconocido en nuestro pais, fundó por su real cédula de 9 de julio de 1829 este Banco Español de San Fernando, no se limitó á acordarle simplemente la facultad de emitir billetes al portador en Madrid, dispensando y derogando respecto á él por el propio hecho las leyes generales que prohiben y condenan la espedicion de esta clase de documentos. Hizo mas aún; le acordó esa facultad en concepto de esclusiva, ó lo que es lo mismo, se desprendió absoluta é irrevocablemente de la potestad de otorgar otra igual ó semejante á nadie durante el tiempo asignado en la concesion misma.

“Se concede, dijo en el artículo 5.º de la espresada real cédula, al Banco de San Fernando la facultad *privativa* de emitir billetes pagaderos á la vista al portador..... Esta facultad se ejercerá precisamente por la administracion del Banco en la corte, y no podrá transmitirse ni delegarse á las cajas subalternas en las provincias.” “La falsificacion, añadió en el artículo 6.º, de los billetes del Banco y la espendicion á sabiendas de billetes falsos ó falsificados, será castigada con la pena prescrita contra los monederos falsos en igualdad de circunstancias.”

Estas disposiciones, Señora, ya por su esencia, ya por la forma en que fueron adoptadas y promulgadas, constituyen una ley propiamente tal en todo el rigor de la palabra; ley que envuelve un empeño sagrado é inviola-

ble, en que la autoridad suprema, el gefe y representante del Estado, el legislador y soberano, en fin, se comprometió á no revocar ni conceder á otro, durante los 30 años que en el artículo 1.º de la misma real cédula habia declarado subsistiria el Banco y con él sus concesiones, esa facultad que le otorgaba con calidad de *privativa*, es decir, peculiar, singular, propia, esclusiva de toda otra igual ó semejante.

Y este empeño tan inviolable y sagrado de suyo, lo era y lo es mucho mas todavia por otra consideracion importantísima, por la de que emanaba y formaba parte integrante de un contrato bilateral y oneroso, en el que si el Estado, representado por el Monarca, habia dispensado beneficios al Banco, tambien éste habia hecho á aquel concesiones de no poca monta. Y dicho se está, que emanando de un contrato de esa especie, solo con consentimiento de ambas partes, y prévia la debida indemnizacion, es como puede romperse.

Al instituir, Señora, vuestro escelso progenitor el Sr. D. Carlos III en 1782 el Banco nacional de San Carlos, lo dotó con grandes privilegios, y le impuso asimismo no pequeñas obligaciones. Las guerras y vicisitudes que despues ocurrieron, y mas aún que ellas los errores en que hubo de incurrirse al fijar las bases de tan util establecimiento, le trajeron á tan triste estado, que en 1828 apenas pasaba de 100.000 rs. la cantidad efectiva á que habia quedado reducido su inmenso capital. Todo ó casi todo este habia sido absorbido por el Estado, que debia por diversos conceptos al Banco la enorme suma de 309.475.983 rs. 20 mrs. vn. Una parte considerable de

esta suma, 50 millones de reales, se habia ya inscrito en el gran libro como deuda consolidada al 5 por 100. Otros 50 millones próximamente debian tambien inscribirse con arreglo á una real orden de 30 de abril de 1824, y el resto hasta los 309 millones y medio de reales estaba casi todo reconocido y liquidado, á escepcion de 81.096.902 rs. 8 mrs. vn. que el Banco habia entregado en pago de fincas nacionales por él compradas en la anterior época constitucional, y de cuyos valores no se queria reintegrarle, aunque se le habia despojado de las fincas, tratándole con la misma injusticia que á los demás adquirentes de esa clase de bienes. Asi consta por la nota que al tiempo de la transaccion se tuvo presente, y cuya copia acompaña señalada con el número 2.º

La administracion del Banco, viéndose con una masa tan enorme de créditos contra el Estado, y sin capital efectivo con que poder hacer frente á las obligaciones y llenar los fines del establecimiento, clamaba sin cesar por la realizacion y pago de aquellos, ó por que á lo menos se le facilitasen medios suficientes para ocurrir á tan urgentes necesidades. Bien aconsejado entonces el augusto padre de V. M., concibió el grandioso pensamiento de regenerar el Banco; y despues de haber prevenido por una real orden á la Junta de gobierno que le espusiese cuáles eran los medios que podrian adoptarse al intento, convencido, en vista de cuanto la misma Junta manifestó á su soberana consideracion, de que el único posible consistia en transigir los referidos créditos por una cantidad alzada, pero efectiva, que sirviese de base á la reorganizacion del Banco, tuvo por conveniente aceptarlo.

Fiel observador en este caso de las formas y trámites que requería la naturaleza del asunto, dispuso S. M. por otra real orden, que la indicada Junta exigiera de la general de accionistas la autorizacion necesaria para tratar de la transaccion y de la reorganizacion del establecimiento con los comisionados que por parte del Gobierno se nombrasen para hacerlo á nombre del Estado. Son en extremo notables los términos en que está concebida esta real orden, cuya copia es igualmente adjunta bajo el número 3.º, porque prueban que desde luego fueron íntimamente enlazadas en el real ánimo la idea de la transaccion y la de la regeneracion del Banco, que era su principal ó mas bien único objeto.

Abundando en los mismos deseos é intenciones la Junta general de accionistas, acordó, en la celebrada el 30 de agosto de 1828, autorizar ampliamente á la de Gobierno para arreglar con el de S. M. la indicada transaccion y cuanto conviene para la reorganizacion igualmente mencionada, según consta por la certificacion del acuerdo número 4.º

En uso de esta autorizacion nombró la Junta de gobierno comisionados que se entendieran con los elegidos por el Monarca; y despues de largas conferencias se ajustó y firmó por los unos y los otros, en 23 de junio de 1829, el convenio de que es copia la señalada con el número 5.º

En este convenio, despues de espresarse con la mayor claridad que su doble objeto consistia en facilitar al Banco una cantidad en metálico suficiente para sacarlo de su actual nulidad, y erigirlo sobre bases mas propias de su instituto, se estableció por los artículos 1.º y 2.º que que-

daban transigidos por la suma fija de 40 millones de reales todos los créditos del mismo contra el Estado, cualesquiera que fuesen, sin embargo de que segun la nota arriba espresada, y que se tenia presente, ascendian los tales créditos á muy cerca de 309 millones y medio, renunciándose por parte del Banco toda reclamacion ulterior acerca de ellos y aun de otros cualesquiera anteriores á aquel dia; y por el 3.º se estipuló, que los referidos 40 millones de la transaccion habian de invertirse precisamente en acciones del nuevo Banco que S. M. iba á erigir al momento, añadiéndose todavia en el artículo 5.º que el convenio no habia de tener efecto hasta tanto que, obtenida la aprobacion soberana, se hallase establecido el nuevo Banco.

Este nuevo Banco era el Español de San Fernando, que se erigió en efecto por medio de una ley, ó sea por la real cédula tantas veces citada, en el mismo dia 9 de julio en que por real orden separada, cuya copia lleva el número 6.º, se aprobó el convenio ó transaccion del 23 de junio. Fueron, pues, Señora, este convenio y aquella ley dos actos, no solo coetáneos sino identificados el uno con el otro, y tan íntimamente ligados y unidos entre sí, que formaron y forman un todo indivisible é inseparable, como lo están y lo forman el real decreto de ereccion del Banco de Isabel II espedido en 25 de enero último, y los estatutos aprobados con la propia fecha, y sobre cuyas bases se funda el Establecimiento, segun la declaracion terminante del artículo 2.º del real decreto.

Ni podia ser otra cosa; y no en verdad porque hubiesen sido los accionistas del de San Carlos los primeros á pedir ó indicar en aquella época semejante identificacion del

contrato y de la cédula, sino porque de parte del Monarca ó del Estado se habia exigido desde luego esa circunstancia como condicion inescusable, precisa, *sine qua non*, del convenio. El augusto padre de V.M. no se contentó entonces con que los créditos del Banco se transigieran por una cantidad alzada, mayor ó menor; quiso que necesariamente hubiera de emplearse esa cantidad en acciones del Establecimiento que iba á crear bajo las bases y reglas que S. M. daria; es decir, impuso á los dueños de ella una inversion forzosa y no dependiente de su libre albedrío.

Este fue el pensamiento capital, dominante, de la transaccion.

Por eso se espidió la real cédula de ereccion fijando las bases del Banco Español de San Fernando al tiempo mismo que se aprobó el convenio. La Junta de gobierno del de San Carlos, que representaba á sus accionistas, aceptó este, porque estimó convenientes á sus poderdantes las disposiciones de aquella. Por manera que en tanto se sometieron los interesados á los sacrificios y gravámenes que les imponia el uno, en cuanto contaron con la seguridad de gozar de los beneficios y ventajas que les dispensaba la otra.

En una palabra, Señora, si ellos renunciaron entonces á créditos contra el Estado que ascendian á la considerable suma de 309 millones y medio por solos 40, fue porque calcularon, que además de la utilidad que este capital podria reportarles empleado en acciones del nuevo Banco, habian de obtener tambien la no pequeña que les produciria la facultad *privativa* concedida al mismo por 30 años de emitir billetes al portador en Madrid.

Esos interesados que tales y tan fundadas esperanzas concibieron en 1829, y que por tan legítimo y justo título adquirieron en aquella época ese esclusivo derecho, son hoy ó sus causahabientes los únicos accionistas del Banco Español de San Fernando, á quien de un golpe y sin audiencia se ha despojado ó se intenta despojar de su privilegio, concediendo á otro Banco la misma, ó por mejor decir mayor y mucho mas estensa facultad respecto á la emision de billetes.

¿Y se compadece semejante despojo con los principios de equidad y de justicia? No en verdad.

El Gobierno mismo de V. M. ha reconocido y proclamado antes de ahora la irrevocabilidad de la real cédula de ereccion de este establecimiento hasta en sus menos esenciales y puramente reglamentarias disposiciones. Cuando el Banco pretendió en 1837 que se rebajara el honorario de 60.000 rs. anuales señalado por el artículo 41 de dicha cédula al comisario regio, se le contestó de orden de la escelsa Madre de V. M., entonces Gobernadora del reino, que S. M. no consideraba arreglada la alteracion de los preceptos de esa ley, y aun se quiso que el establecimiento entregase al Tesoro la cantidad que dejaba de abonar al comisario D. Mariano de Egea, por haber sido éste nombrado con solo el sueldo de ministro cesante. Mas tarde, aunque se desistió de esta última idea, volvió á ser denegada otra solicitud de reduccion; y por fin, en real orden de 11 de diciembre de 1840 se resolvió espresamente que debia pagarse íntegra, como se ha pagado y se paga al comisario, la retribucion de los 60.000 rs. asignada en el citado artículo.

lo 41 de la cédula, "respecto á que ella *forma* (dice la orden) *la ley y el contrato en cuya virtud existe el Banco, y sus disposiciones deben cumplirse.*"

Asi aparece de las copias comprendidas bajo el número 7.º Y aqui tiene V. M. confesado por la propia boca de su Gobierno, el dato que constituye el fundamento capital de la presente reclamacion.

La real cédula de 9 de julio de 1829, parte integrante y esencial del convenio de 23 de junio aprobado en real orden de aquella propia fecha, forma en efecto la ley y el contrato en cuya virtud existe el Banco. Como ley, no puede derogarse ni modificarse sino por otra ley propiamente tal, y dada de la manera que prescribe la Constitucion actual de la monarquía. Y como contrato, y contrato bilateral y oneroso, solo por consentimiento unánime de las partes contratantes, y prévia la oportuna indemnizacion, puede ser roto ó rescindido.

Sus disposiciones, pues, deben cumplirse mientras por esos medios únicos, legales y justos no se revoquen, como deben cumplirse y observarse las de toda ley y todo contrato vigentes. Y puesto que una de esas disposiciones, y precisamente la mas trascendental é importante, es la contenida en el artículo 5.º, que concede al Banco Español de San Fernando por los 30 años de su duracion la facultad privativa de emitir billetes al portador en Madrid, es claro, y tan claro, Señora, como la luz del medio dia, que no ha podido ni puede concederse al Banco de Isabel II ni á otra corporacion ni persona semejante facultad, y que concediéndosela se causa un verdadero despojo al establecimiento que esta Junta representa.

Y no se crea que este privilegio del Banco español puede considerarse caducado á consecuencia de las leyes hoy restablecidas que abolieron todos los prohibitivos, exclusivos y privativos que nos habia legado en herencia el feudalismo. No hay, Señora, ni la mas remota analogía siquiera entre aquel y estos privilegios.

Por de contado, que aun cuando la hubiera y debiese de sus resultas desaparecer el privilegio del Banco, ni su estincion podria ser objeto de una medida del gobierno solo, ni cabria decretarla sin acordar la indemnizacion competente. Porque en tal caso, habiendo de perder los antiguos accionistas del de San Carlos, que hoy son los únicos del de San Fernando, una de las principales ventajas que por la transaccion de 1829 consiguieron, preciso sería que, ó se les resarciera ampliamente del perjuicio que de esa pérdida les resultase, ó se rescindiese aquella transaccion, y restituyendo ellos los 40 millones percibidos del Estado, recobrarán sus créditos importantes 309 millones y medio de reales; créditos que hoy valen mucho mas de los 40 millones, pues solos los 81 empleados en bienes nacionales representan en el dia un capital efectivo infinitamente mayor.

Pero ha dicho, Señora, y repite esta Junta, que no hay analogía ni la mas remota entre el privilegio del Banco y los feudales abolidos por las Cortes extraordinarias de Cadiz. Y la razon que demuestra esta verdad es tan óbvia como concluyente. Los privilegios suprimidos é incompatibles con las leyes constitucionales vigentes, son los que impedían á los españoles el libre uso y ejercicio de sus naturales y legítimos derechos. Pero el

otorgado al Banco por el artículo 5.º de su cédula no produce ese efecto, ni puede nunca dar ese resultado. Él no priva á nadie de facultades que le correspondan, ni le prohíbe ejecutar lo que por regla general le sea lícito. Lejos de esto, lo que hace es permitir al Banco una cosa que está vedada por la ley á los demás; dispensar respecto á él, pero solo á él, la disposición general del artículo 571 del Código de Comercio, que declara que los pagarés en favor del portador sin espresion de persona determinada (llámense cédulas ó billetes) no producen obligación civil ni accion en juicio.

Privilegios de esta clase, en todos tiempos y países se han conocido y se conocen. En todas partes se consideran como objetos de propiedad, susceptibles de la misma protección que á ella se acuerdan por las leyes, y de los mismos remedios que éstas otorgan para vindicarla, conservarla ó recuperarla. Por eso los letrados consultados por el Banco no han titubeado en sentar en su dictamen, que le competen á éste los interdictos posesorios para conseguir del poder judicial que le ampare ó restituya, según las circunstancias, en el goce esclusivo de su facultad de emitir billetes al portador en Madrid; y por eso han aconsejado á la Junta, que entable dichos interdictos en uso de su derecho, y hasta en cumplimiento de sus más imprescindibles y sagradas obligaciones.

Esta Junta, Señora, protesta solemnemente hacerlo así, y no renunciar tácita ni espresamente al ejercicio de los tales remedios legales; pero antes de llegar á interponerlos, ha creído que, por respeto á V. M., debia esponerle reverentemente los poderosos motivos en que des-

causa su oposicion á la concesion hecha por el Gobierno al nuevo Banco de Isabel II en el artículo 6.º de los estatutos; concesion que, como queda demostrado, es evidentemente contraria á la ley y á la justicia, ya se considere en abstracto, ya se examine en su relacion con los derechos legítimamente adquiridos por el Banco Español de San Fernando.

Los servicios que este establecimiento, hoy tan util y tan próspero, ha prestado y sigue prestando al Trono y al Gobierno, al Estado en general, y en particular á la industria y al comercio, y los sacrificios no pequeños en verdad á que sus accionistas se sometieron al aceptar la transaccion de 1829, merecen bien, Señora, que no se lastime ni rompa, sino que por el contrario se le guarde y cumpla con la religiosidad debida, el privilegio que forma una de las bases principales de su existencia. Y por tanto la Junta, confiada en la suprema rectitud de V. M. y en la notoria justicia de su causa,

Suplica á V. M. rendidamente se digne tomar en su alta consideracion cuanto se ha manifestado, y en atencion á ello mandar que queden sin efecto las medidas adoptadas en 25 de enero último para la ereccion en esta corte de un nuevo Banco de descuentos, préstamos, giros y depósitos bajo la denominacion de Isabel II, en todo lo que perjudicare á los derechos adquiridos por el Banco Español de San Fernando, y con especialidad en la concesion hecha á aquél por el artículo 6.º de sus estatutos, de la facultad de emitir cédulas al portador pagaderas en la capital del reino, como opuesta á la *privativa* de que este Banco goza á virtud de las inviolables

disposiciones de la ley y del contrato á que debe su existencia. Asi lo espera de la soberana justificacion de V. M., cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid 22 de febrero de 1844.=Señora.=A L. R. P. de V. M.=El Comisario regio, *Marqués de Casa-Irujo*.



Número 1.

DOCUMENTOS

QUE ACOMPAÑAN

A ESTA ESPOSICION.

Los letrados por la Junta de go-
bierno del Reino, sobre las decimas que
asistan al mismo, el decreto de 23 de
este último, que erige un nuevo Banco en decretos, préstamos,
giros y depósitos en esta corte, y por los estatutos que para él y
con la propia fecha se han aprobado por el Gobierno, así como entre
los medios legales que el Gobierno desea ejercitar para hacer
valer sus derechos, hemos examinado y discutido el punto con el
determinante que requiere un curso de tanta importancia, y enor-
me de los antecedentes y documentos que nos ha pasado la Junta
para poder manifestar á

1.º Que aun cuando la cuestion parece sencilla y se resuelve
tan fácil, que apenas y aun sin apuro basto para darla el buen sen-
tido ayudado de los conocimientos mas elementales de nuestro dere-
cho, la gravedad de la materia, y el tener sobre disposiciones acor-
dadas en Consejo de Ministros, que han propuesto á S. M. como
grandemente útiles, legítimas y justas aquellas medidas, son cir-
cunstancias que á nuestro juicio exigen una explicacion de la historia
legal de nuestros Bancos hasta el erigido en dicho real decreto, para
que así se pueda ver de tutto el derecho que asiste al de San Fer-
nando, y así la obligacion en que se halla la Junta de recoger
de oposicion á que se realicen los perjuicios que le amenazan.

2.º Cuando se reflexiona sobre la escasez de los elementos con que
la España ha contado en siglos anteriores para desarrollar su co-
mercio interior, y sobre los muchos y poderosos impedimentos que faci-
taban su industria á la agricultura y ganaderia, parece increíble
que hayamos tenido períodos repetidos y de tan larga duracion, en
los que el comercio español floreció en nuestro pais quisiéramos
que en algun otro de Europa. Si examinamos la causa de este
fenómeno, la encontramos en la escasez de capitales y en el
crédito de los negociantes españoles, que desde tiempos muy anti-

disposiciones de la ley y del contrato á que debe su existencia. Así lo espera de la soberana justificación de V. M., cuya vida guarda Dios muchos años. Madrid 22 de febrero de 1844. — Señora. — A. L. B. P. de V. M. — El Comisario regio, *Marqués de Casa-Irujo*.

DOCUMENTOS

DE ARCHIVO

A ESTA DISPOSICION.

Número 1.

Los letrados que suscribimos, consultados por la Junta de gobierno del Banco Español de San Fernando sobre los derechos que asistan al mismo y se hayan lastimado por el real decreto de 25 de enero último, que erige un nuevo Banco de descuentos, préstamos, giros y depósitos en esta corte, y por los estatutos que para él y con la propia fecha se han aprobado por el Gobierno, así como sobre los medios legales que el de San Fernando deberá ejercitar para hacer valer sus derechos, hemos examinado y discutido el punto con el detenimiento que requiere un suceso de tanta importancia, y enterados de los antecedentes y documentos que nos ha pasado la Junta para poder formar nuestro juicio con acierto, debemos manifestar á la misma :

1. Que aun cuando la cuestion parece sencilla y su resolucion tan fácil, que acaso y aun sin acaso baste para darla el buen sentido ayudado de los conocimientos mas elementales de nuestro derecho, la gravedad de la materia, y el recaer sobre disposiciones acordadas en Consejo de Ministros, que han propuesto á S. M. como grandemente útiles, legítimas y justas aquellas medidas, son circunstancias que á nuestro juicio exigen una esplanacion de la historia legal de nuestros Bancos hasta el erigido en dicho real decreto, para que así se perciba mas de bulto el derecho que asiste al de San Fernando, y aun la obligacion en que se halla su Junta de gobierno de oponerse á que se realicen los perjuicios que le amenazan.

2. Cuando se reflexiona sobre lo escaso de los elementos con que la España ha contado en siglos anteriores para desarrollar su comercio interior, y sobre los muchos y poderosos impulsos que inclinaban su industria á la agricultura y ganadería, parece increíble que hayamos tenido periodos repetidos y de bien larga duracion, en los que el comercio español floreció en nuestro país quizá mas que en algun otro de Europa. Si examinamos la causa de este fenómeno, la encontraremos en la escelente reputacion y asentado crédito de los negociantes españoles, que desde tiempos muy anti-

guos hizo proverbial la probidad y buena fe de nuestro comercio. La confianza es el alma de esta industria: en donde aquella falta esta desaparece.

3.º Pero la moralidad de un pueblo ó de una clase la forma su legislacion, y la española ha descollado entre todas las de Europa en esta parte, pues, como dice un historiador y jurisconsulto, extranjero por cierto, España fue la Roma austera de los tiempos medios y de los siglos posteriores. En nuestra legislacion mercantil prevaleció siempre el principio de asegurar la confianza pública aun á espensas de un desarrollo peligroso.

4.º Concretándonos á los Bancos, no podemos dejar de admirar la prevision y sabiduría de nuestros legisladores. Las *trabas* que los economistas modernos anatematizan como ruinosas, atribuyéndolas fundadamente las quiebras frecuentes y las bancarrotas que se realizan, las vemos condenadas y penadas bajo el nombre de cambios secos en una pragmática del Sr. D. Felipe III de 1608. Desde 1405 se prohibió por el Sr. D. Juan el II que ninguno pudiese establecer cambio ó Banco público en la corte sin nombramiento y autorización real, ni en las provincias sin el de las justicias y ayuntamientos; debiendo ser los banqueros personas de buena fama, abonados y cuantiosos, y obligándoseles además á dar fiadores con las mismas cualidades, los que responderian con sus bienes de las operaciones de aquellos. La facilidad que debió de haber de parte de los ayuntamientos en la admision de las fianzas, produjo la real resolucion del Sr. D. Felipe IV, en que se hizo responsables á dichas corporaciones para el caso de que los fiadores fuesen insolventes. Las grandes ventajas que reportó el pais de este sistema de severidad y de precauciones, por mas incompatibles que ellas sean con el desarrollo mercantil actual, aparecen consignadas en real cédula de 23 de diciembre de 1642, en que se manifiesta la altura á que se elevaron nuestros Bancos por consecuencia de aquellas disposiciones.

5.º El mismo estado de prosperidad á que llegó nuestro comercio, reclamaba un establecimiento de mayor estension y ensanche de operaciones, y así fue que en tiempo del Sr. D. Felipe II las corporaciones mas respetables del reino pidieron á S. M. la creacion de un Banco nacional de descuentos, depósitos y giro, renovándose esta solicitud en los reinados posteriores, y haciéndose tambien por las Cortes de 1617. Clamor tan general y constante fue sin embargo desoido, porque el Gobierno sin duda no acertaba con el medio de procurar aquel bien, conciliando la estension de operaciones mercantiles con la seguridad de los establecimientos.

6.º La desastrosa administracion del reinado del Sr. D. Carlos II

alejó semejante necesidad. El comercio propiamente dicho desapareció; los Bancos de cambio se arruinaron con las exacciones y empréstitos, y á los negociantes se abrió un nuevo rumbo para sus especulaciones con los apuros del Erario. Las rentas públicas se arrendaron; los ingresos de las colonias se sometieron á conciertos, y hasta las aduanas cayeron en las manos de los empresarios, constituyendo á la nacion en una miseria espantosa y al Gobierno en declarada bancarota. La nueva dinastía nos levantó de este estado de postracion, y nos produjo al inmortal Carlos III.

7.º Este célebre monarca fomentó todos los ramos de la riqueza pública, y ya con eso se sintió la necesidad de un Banco nacional, la cual satisfizo S. M. con la ereccion del de San Carlos, acordada por cédula de 2 de junio de 1782. Secundando el Rey el buen espíritu de nuestra antigua legislacion, adoptó precauciones esquisitas para afianzar el crédito del Banco, pero le hizo al mismo tiempo concesiones singulares, entre las que descuella el derecho hipotecario que atribuyó á todos sus créditos, aun contra los bienes de mayorazgo; privilegio que jamás se concedió á nadie, ni al fisco mismo.

8.º Por la ligera reseña que llevamos hecha de nuestra legislacion mercantil en el punto relativo á Bancos, se ve que desde los mas remotos tiempos, ni aun los de cambio podian establecerse sin autorizacion real y sin las precauciones correspondientes, pues hasta la facultad concedida al principio á las justicias y ayuntamientos para sancionar su ereccion en las provincias fue despues restringida por real cédula de 1602, en la que, para evitar contemplaciones mal habidas con los que aspirasen á formar tales establecimientos, se dispuso que todos los expedientes de ereccion y fianzas se pasasen previamente á la aprobacion del Consejo. S. M. solo podia por nuestras leyes crear Bancos como los de que se trata. Tanto por esta razon cuanto por el carácter nacional que tuvo el de San Carlos, fue indispensable una ley para su creacion, y esta se promulgó, porque ley era en aquella época la voluntad soberana del Monarca.

9.º Andando los tiempos las ideas económicas tomaron otro giro, y se hizo necesaria la reforma de nuestra legislacion mercantil. Un ministro de pensamientos elevados, digno en verdad de los elogios de todos los españoles, aconsejó al Sr. D. Fernando VII sobre este punto, y se sancionó y publicó el Código de Comercio por real cédula de 30 de mayo de 1829, en que se reconoció la libre facultad de todo español ó extranjero para dedicarse á los diferentes ramos del comercio.

Dejóse á la opinion obrar sobre el crédito de los establecimientos

mercantiles, reconociéndose aquella como única y suficiente garantía para las especulaciones comerciales de confianza.

10. Esta ley sin embargo no afectó la constitutiva del Banco de San Carlos, ya por su índole nacional que le colocaba en un caso escepcional, ya porque sus vínculos con el Gobierno, vínculos fundados en la misma ley de ereccion y en sus actos consecuenciales, no dejaban á éste en plena libertad para proceder, mediando cual mediaban pactos obligatorios. Pero el Banco de San Carlos no podia llenar el objeto de su institucion, y propio de la naturaleza de estos establecimientos nacionales. Sus cuantiosos fondos habian sido ocupados sucesivamente por el Gobierno, que fundado en la ley de su creacion demandaba, contrataba, concertaba, &c., sin que el Banco pudiera oponerse; y como aquel no habia llenado sus obligaciones ni solventado sus débitos, el capital habia venido á desaparecer completamente. Segun el estado formado en 1828, el Gobierno ó el Estado adeudaba al Banco 325.343.087 rs. 20 mrs.

11. La imposibilidad en que el Estado se hallaba de cumplir tan sagradas obligaciones; la no menor en que estaba constituido para erigir un nuevo Banco nacional, ora por los vínculos antedichos, ora porque los establecimientos revestidos de este carácter se escluyen absolutamente, y la imperiosa necesidad de la existencia de uno de esta clase que favoreciese el desarrollo de la industria mercantil, fueron otros tantos torcedores para aquel honrado ministro, el Sr. Lopez Ballesteros, quien dió por fin vado á este negocio con la energía y resolucion que resplandecian en casi todos sus actos. La Junta gubernativa del Banco instaba diariamente para el abono de sus anticipos y créditos; fatal legado que dejaron á aquel ministro sus predecesores; y el Gobierno previno á la Junta en real orden de 28 de mayo de 1828 que inmediatamente formase un balance general de todas las existencias, créditos, derechos y débitos, y que propusiese á S. M. los medios que conceptuase mas oportunos para regenerar el Banco; en la inteligencia de que el Rey estaba resuelto á darle nueva vida para bien general de la nacion y beneficio de los accionistas. Todos los proyectos hasta entonces concebidos con este fin habian fracasado por la falta de fondos, y la Junta, convencida como el Gobierno de que sin capital eran estériles todos los esfuerzos, manifestó á S. M. que no habia otro medio que el de constituir uno efectivo y bastante cuantioso á favor de una transaccion entre el Gobierno y el Banco.

12. Nombráronse comisiones al intento, y persuadido el Monarca de la imposibilidad de lograr otra solucion, aprobó el concierto por ellas formado en 23 de junio de 1829. Por este convenio el Banco

condonó al Estado todos los créditos que tenia contra el mismo, importantes 309.475.983 rs. 20 mrs. por la cantidad alzada de 40 millones de reales efectivos. Esta suma sin embargo se capituló conforme á los deseos de S. M. que no la habian de percibir los accionistas, sino que deberia servir precisamente de capital para un nuevo Banco, y se obligó á los propios accionistas á liquidar y extinguir el antiguo, hasta cuyo caso y la ereccion del nuevo no habia de tener efecto el contrato.

13. Erigióse realmente el nuevo Banco con la denominacion de *Banco Español de San Fernando*, marcándose asi su carácter de establecimiento nacional, y sustituyéndose á esta voz, contra la que habia prevenciones en aquella época, la de español. En la transaccion celebrada para este fin se reservó S. M. dar los estatutos convenientes como facultad privativa de la corona; y en efecto, con la propia fecha con que aprobó el convenio de 23 de junio, espidió su real cédula de ereccion de 9 de julio de 1829, cuya importancia requiere un examen detenido.

14. Publicado como estaba ya el Código de Comercio, por el que todo español ó extranjero, reuniendo los requisitos exigidos, podia establecer todo género de tráfico ó comercio bajo los pactos que á bien tuviese, la ereccion del Banco hecha por real cédula, esto es por una ley que entonces lo era, no podia fundarse sino en una de dos circunstancias, á saber: ó en su cualidad de nacional y como tal constituido bajo la salvaguardia y garantías del Gobierno, ó en la de ser una sociedad anónima que debia disfrutar de privilegios ó facultades especiales, segun lo que se dispone en el artículo 294 del Código de Comercio.

15. En nuestro sentir, ambas causas concurrieron para que S. M. obrarse como obró, y esto resulta de los documentos que tenemos á la vista. No cabe duda en que el antiguo Banco de San Carlos era un establecimiento nacional, y asi lo espresa la real cédula de su ereccion. Tampoco se puede dudar que ella y los actos posteriores concedieron derechos á los accionistas para sostener aquella cualidad, y con la misma la de ser el único de su clase en España. Esto lo reconoció virtualmente el Monarca en los actos que precedieron á la transaccion, y de aqui provino que siempre se pusiera por condicion la reorganizacion del establecimiento ó la creacion de uno nuevo con los capitales del antiguo, acomodándolo á objetos mas propios de su instituto. Por eso en la cédula de 9 de julio de 29 el Gobierno se atribuyó una intervencion eficacísima; el nombramiento de comisario regio ó presidente y de otros funcionarios, la designacion de cajas subalternas en las provincias, y otras prerrogativas muy

importantes, como lo es entre varias la de haber de aprobar antes de su ejecucion todos los acuerdos de la Junta general de accionistas; la índole, repetimos, del Banco Español de San Fernando es nacional, y considerándolo con este carácter, el Gobierno debió reservarse, cual se reservó, su ereccion.

16. También debió hacerlo por las gracias y facultades que concedió al establecimiento, y se consignan en la misma real cédula. La primera fue la privativa de emitir billetes ó pagarés al portador en Madrid, no obstante la prohibicion del artículo 571 del Código de Comercio; gracia cuya importancia manifestaremos mas adelante. Fue la segunda, y no de menor aprecio, la de declarar que se castigase á los falsificadores de estos títulos con las mismas penas que á los de la moneda; concesion que igualó estos documentos de crédito al numerario en sus garantías sociales, inspirando así respecto á ellos una confianza que de otra manera no podia hacerse concebir. Consistia la tercera en permitir por este medio al Banco un giro continuo en un papel sin satisfacer el impuesto del timbre ó sello, señalado por una ley, y del cual no están exentas ni aun las libranzas del Tesoro público. Otras disposiciones muy importantes contuvo la real cédula de ereccion, y esto bastaba para que fundándose el Banco sobre una sociedad anónima, el Monarca debiese prestar su real aprobacion, segun se dispone en el citado artículo 294 del Código de Comercio.

17. Esa cédula de ereccion fue sin embargo parte integrante ó complementaria de la transaccion al mismo tiempo celebrada entre el Gobierno y el Banco de San Carlos, cuyo capital vino á constituir el de San Fernando pasando los accionistas de aquel á serlo de este, y no como quiera, sino forzadamente y por efecto de la condicion impuesta. Como una de las partes contratantes era la autoridad suprema, el legislador y el Rey, á ella sola tocaba ejercer el acto propio y peculiar suyo, de la expedicion de la cédula; pero esto no disminuye ni desvirtúa su calidad de pacto, y muchos son los casos de esta naturaleza ocurridos cuando el poder estaba refundido en nuestros reyes. La cédula de ereccion es en suma un acto obligatorio para el Estado, lo mismo que para el Banco.

18. Respecto á la cuestion que ahora se agita, nada influye la determinacion del carácter que tenga la real cédula de ereccion, pues que tan firme é inatacable es en nuestro sentir considerándola como contrato ó parte de él, quanto reputándola como una ley sin aquella cualidad. Que realmente es una ley con toda la fuerza de tal, no puede ponerse en duda, pues el Monarca estaba á la sazón en que

se espidió investido del carácter de legislador, y á los preceptos suyos, aun sin tales formas, se ha dado este valor legal hasta por actos posteriores á la division de los poderes públicos. La diferencia única que habria entre una y otra consideracion, es la de que reconocida como parte de un contrato por el que los accionistas del Banco dimitieron en favor del Estado la enorme suma de 269.475.983 rs. 20 mrs. en contemplacion á las gracias que se les dispensaban, si por una ley, única forma en que podria la real cédula derogarse, modificarse ó afectarse, se hiciera esto, la misma ley que la reformara tendria que acordar ó prevenir la correspondiente indemnizacion, lo que no sucederia si se reputase mera gracia y concesion no pactada.

19. Quede, pues, asentado que la facultad privativa concedida por el Soberano al Banco de emitir billetes al portador en Madrid, dispensando á su favor la prohibicion del artículo 571 del Código de Comercio, y haciéndole esclusiva dicha potestad bajo las seguridades y precauciones establecidas en la real cédula de ereccion, fue una merced especial, que dió un derecho al Banco del cual solo puede desposeérsele por una ley, y en nuestro sentir prévia indemnizacion, y no en otra forma, puesto que esa merced hace parte y emana de un contrato oneroso. Supuesta la existencia y eficacia de este derecho, pasamos á examinar el real decreto de ereccion del nuevo Banco y los estatutos que se le han dado por el Gobierno en 25 de enero último.

20. Antes de considerar dichas reales resoluciones en su relacion con los derechos del Banco de San Fernando, debemos examinar estos actos genéricamente ó en abstracto. Si el nuevo Banco que se erige por el real decreto citado es particular, sin carácter nacional, no garantido por el Estado, ni puesto bajo su especial proteccion, inspeccion y vigilancia; si es una empresa de negociantes, basada en una compañía de comercio, entonces no ha podido erigirse por el Gobierno; y en haberle prestado esa autorizacion inusitada, inconveniente y nada legal, puede hasta comprometerse el nombre y crédito de la nacion, y aun ocasionarse un dia conflictos de cierto género. La ley tiene determinado que tales establecimientos se constituyan por escritura pública que debe registrarse en su oportuno lugar; y cuando las sociedades sobre que se fundan son anónimas, los reglamentos ó estatutos deben aprobarse por los tribunales especiales de comercio, segun el artículo 293 del Código. El Gobierno, pues, aprobando ó dando por sí aquellos estatutos, ha traspasado en nuestro sentir sus atribuciones, y ha desempeñado las que la ley comete exclusivamente á los referidos tribunales.

Cierto es que el artículo 294 dispone que cuando se conceda algun privilegio para fomento de una compañía anónima, entonces la aprobación de los estatutos sea de S. M.; pero como por las instituciones que nos rigen la Corona carece de facultades para conceder privilegios de los que pueden comprenderse en dicho artículo, los cuales han de ser precisamente objeto de una ley, y como tampoco en el real decreto de erección se menciona privilegio alguno, es evidente que esta real resolución no es legal ni conforme á derecho; de manera que no tiene carácter determinado por nuestra legislación, ni puede explicarse razonablemente lo que signifique un real decreto de creación de un establecimiento mercantil de particulares. Los estatutos son pues nulos de toda nulidad, como no aprobados por el tribunal designado por la ley.

21. Si el nuevo Banco que se erige es un establecimiento nacional, entonces no creemos que esté en las facultades del Gobierno su creación, que debería hacerse por una ley atendida su naturaleza y efectos. En ningún país regido por instituciones libres se ha atribuido el Gobierno, que nosotros sepamos, semejante potestad, y aun medidas secundarias para su sostenimiento ó para el fomento de su crédito, han sido adoptadas por leyes especiales. Consúltese la historia del Banco de Inglaterra y del de Francia y se verá confirmada esta verdad.

22. Aunque en el real decreto de erección no se concede al Banco de Isabel II facultad, merced ni privilegio alguno, por cuya razón no alcanzamos (debemos repetirlo) qué signifique dicha real resolución, en los estatutos aprobados se comprende un privilegio importantísimo y trascendental, aunque ellos no sean el documento en que debiera consignarse. Tal es el que contiene la regla ó artículo 6.º de los estatutos. En él se dice que el Banco podrá emitir y poner en circulación cédulas al portador en Madrid por un capital duplo al que tenga en efectivo. Esta clase de papel, cual llevamos manifestado, la reprueba el artículo 571 del Código de Comercio, y por consiguiente el Gobierno ha dispensado la ley para con el nuevo Banco. El código es una ley, y de ella no puede dispensar la Corona, á la que están prefijadas tasativamente las solas gracias que puede conceder.

La de que se trata es peculiar y privativa del poder legislativo, pudiéndose hacer únicamente por las Cortes con el Trono, por la razón sencillísima de que á quien hace las leyes toca derogarlas, modificarlas ó dispensarlas. Pero la concesión que nos ocupa envuelve todavía otra dispensa, y es la de eximir al Banco en esos giros de la obligación de usar del papel timbrado para los documentos de cré-

dito, en lo que se priva al Erario público de unos ingresos de gran cuenta en perjuicio de todas las clases del Estado.

23. Considerados, pues, en abstracto el real decreto de ereccion del nuevo Banco y los estatutos aprobados para su régimen, carecen de valor legal por la traslimitacion de atribuciones en que el Gobierno ha incurrido. Pasemos ahora á examinarlas en su relacion con los derechos del Banco de San Fernando.

24. Hemos demostrado en nuestro sentir cumplidamente, que la real cédula de ereccion del de S. Fernando fue parte integrante y complemento del contrato de transaccion, celebrado entre el Gobierno á nombre del Estado y los accionistas del Banco de San Carlos cuyos capitales y acciones pasaron á constituir el de San Fernando. Para considerar aquella ley como parte integrante del contrato, no tuvimos mas que examinar el concierto celebrado, las esposiciones de la comision á la Junta general de accionistas que motivó la aprobacion, y la misma cédula de ereccion; pero existe además un documento irrecusable que asi lo declara, y es la real orden de 11 de diciembre de 1840. Para que pueda percibirse toda la fuerza que contiene esta real resolucion, bueno será indicar los antecedentes que la provocaron.

Por la cédula de ereccion se reservó S. M. nombrar un comisario regio, presidente del Banco, con el sueldo de 60.000 rs., que serian satisfechos por este lo mismo que las otras retribuciones concedidas á los demás funcionarios de nombramiento real, que S. M. tambien se reservó designar. Estas retribuciones se fundaban en los servicios personales que estos funcionarios debian prestar, por ligeros que ellos fuesen; y asi es que nada se estipuló respecto á la percepcion por el Erario público en los casos de vacante ó de reduccion de sueldos. Por real orden de 5 de diciembre de 1837 se nombró comisario regio al Excmo. Sr. D. Mariano Egea, pero previniéndose que en atencion á los apuros del Erario no percibiese mas sueldo que el que disfrutaba como ministro cesante. Era este un ejemplar que hacia mas onerosa la obligacion del Banco, pues que la prestacion de los 60.000 rs. parecia reputarla el Gobierno como un ingreso correspondiente al Tesoro público. Mucho tenia á la verdad de extraño y sorprendente semejante pensamiento; pero todavia se esplanó y consignó mas claramente por otra real orden posterior en que S. M. la Reina, entonces Gobernadora, estimó conveniente declarar que no consideraba arreglado se alterasen las disposiciones de la real cédula, y que en consecuencia era su voluntad se pagáran al Tesoro los 28.000 rs. que dejaba de percibir el comisario. Anulóse despues esta determinacion; y los incidentes que con tal motivo ocurrieron, dieron

ocasion para que la Junta de accionistas suplicara á S. M. en 1838 que se dignase resolver que la comisaría regia era un cargo honorífico, y que al que lo desempeñase se abonaran por el Banco solo por via de gratificacion 20.000 rs., mas tambien se denegó por entonces esta pretension. Nombrado comisario en 30 de noviembre de 1840 el Excmo. Sr. D. Ramon Gil de la Cuadra, se instó de nuevo por la Junta para la relevacion de dicha carga; y en vista de esta instancia recayó la citada real orden de 11 de diciembre del propio año, en que se dispuso que el sueldo fuese el de 60.000 rs. que señala el artículo 41 de la real cédula de ereccion, respecto á que ella *forma la ley y el contrato en cuya virtud existe el Banco*. Es cuestion resuelta, pues, por el mismo Gobierno la de que la cédula de ereccion además de ser una ley, es el contrato entre el Estado y los accionistas.

25. Por el artículo 5.º de ese importante documento se concedió al Banco, como ya queda dicho, la facultad *privativa* de emitir en Madrid billetes ó cédulas al portador, pagaderas á la vista. Este no fue un privilegio restrictivo ó prohibitivo, por el cual se estableciera un monopolio á favor del Banco y en perjuicio de los otros ciudadanos y compañías mercantiles, pues que no siendo permitido á nadie emitir tales billetes segun lo dispuesto en el artículo 571 del Código de Comercio, no se priva á ninguno de un derecho que le perteneciera, ni de una facultad que le autorizara, sino que fue un privilegio de escepcion, si tal puede llamarse lo que no es sino una ley especial de dispensacion para hacer lo que en general no es permitido.

26. Esta autorizacion particular pudo hacerse de dos maneras, á saber, simplemente, ó con calidad de no conceder otra en beneficio de alguno. En el primer caso, el legislador quedaba en plena libertad para dispensar la prohibicion parcial ó generalmente; pero en el segundo se ligaba y comprometia por el tiempo de la gracia á no poder autorizar á persona ni corporacion alguna para la emision. Examinada la real cédula, se ve que la facultad concedida al Banco fue privativa, esto es, singular ó con exclusion de toda otra persona ó corporacion. Esta condicion, pues, ligó al Gobierno, ó por mejor decir al poder supremo, á no conceder á otro igual gracia, mayormente habiéndola el Banco adquirido por un titulo oneroso que no puede relajarse sin concurrir la voluntad de ambas partes contratantes.

27. Aunque así no fuera, aunque la real cédula no constituyese parte del contrato, como el mismo Gobierno ha declarado, sino que se reputase un acto espontáneo y gratuito del Soberano, ó merced libre, tampoco podria hoy la Corona relajarlo ó derogarlo. La concesion

fue hecha por una ley, y solo por otra puede dejar de tener efecto. El Monarca no tiene hoy, cual arriba se ha asentado, las facultades que le asistian cuando la concesion se hizo: están limitadas por la Constitucion del Estado, y en las que le corresponden no se encuentra la de derogar las leyes, modificarlas y alterarlas. Es mas; como esta gracia tiene por objeto el dispensar la observancia de dos leyes, la del Código de Comercio en su artículo 571, y la que regula el uso del papel sellado para los documentos de crédito y de giro, nunca podria concederla el Monarca sino con el concurso de los cuerpos colegisladores.

28. Los derechos, pues, adquiridos legítima y legalmente por el Banco Español de San Fernando han sido hondamente afectados por los estatutos dados al de Isabel II, y la Junta gubernativa de aquél está obligada, bajo estrecha responsabilidad, á defenderlos y salvarlos. Si la Junta no fuera una simple administradora y guardiana de intereses ajenos, quizá nosotros la aconsejaríamos que por grave que sea, como lo es, el ataque que ha sufrido el Banco en sus derechos, no ejercitara medios algunos para vindicarlos, puesto que estamos profundamente persuadidos de que los billetes que pueda emitir el nuevo Banco no inspirarán jamás confianza en el comercio, y antes por el contrario creemos, que esta que reputa como gracia ha de ser la causa segura de la ruina del establecimiento.

29. No habiéndose concedido la facultad de la emision por una ley, cual se necesitaba, es seguro que los tribunales en los casos que ocurran no podrán dar valor á un real decreto contra leyes espresas. Indudable nos parece que no habrá tribunal que tal haga; y si por desgracia alguno fuese tan débil que á ello se prestase, caería en grave responsabilidad, que no dudamos sería efectiva. Pues bien; como que las cédulas, billetes ó pagarés al portador sin escepcion de persona determinada dice el artículo 571 del Código que no producen obligacion civil ni accion en juicio, es claro que el nuevo Banco al recibir numerario por billetes, adquiere valores efectivos y entrega en cambio un papel del que el tenedor no puede hacer uso, porque nada representa, porque á nada queda obligado por él el Banco, porque ese papel, en fin, no produce accion alguna, ni los tribunales pueden admitirlo en juicio. El crédito de toda cédula al portador consiste en que el valor que representa sea tan efectivo cual si acompañase la moneda metálica á la misma cédula; y si las del nuevo Banco no pueden serlo, porque el establecimiento no queda obligado civilmente á restituir su importe, ni el tenedor puede reclamarlo, es claro que no puede ser efectivo el valor, ni este papel adquirir crédito.

30. Y no solo tendrán este gravísimo inconveniente las cédulas que se emitan, sino que serian un peligro continuo para los tenedores, porque en todo caso que viniesen á juicio, como giradas en papel privado y no en el del timbre señalado por la ley á los documentos de giro, los portadores habrian de sufrir la pena que la misma señala á esta infraccion.

31. Por graves que sean las consideraciones espuestas, todavia queda otra mayor que imposibilita la emision de las cédulas, y es el riesgo inminente de la falsificacion. La Junta sabe que en un corto periodo de tiempo se han hecho cuatro falsificaciones de los billetes del Banco de San Fernando, y con tal maestría que una de ellas se percibió precisamente por la mayor perfeccion de los contrahechos. Esto se ha realizado con unos billetes que por el artículo 6.º de la real cédula de ereccion están equiparados á la moneda respecto á la persecucion y castigo de los falsificadores; es decir, que autores, cómplices y espendedores á sabiendas, tienen la pena de muerte, y así se estampa en el membrete de los mismos billetes, avisando del peligro á los que se sientan dispuestos á la comision de tamaño delito. A esto se agrega, que como él es privilegiada la prueba, lo que hace que la pena sea segura. Pues bien, á los billetes del nuevo Banco no se ha concedido este privilegio, sin duda porque el Gobierno se arredró delante de ese artículo penal, cuyo establecimiento reconoció ser acto peculiar del poder legislativo. La falsificacion, pues, de los billetes que emitiera el Banco de Isabel II será delito privado como la de documentos de esta clase; delito al cual nuestras leyes no señalan pena cierta y determinada, siendo discrecional, y ordinariamente correccional y lijera, la que por él se impone.

32. Si penas de esta naturaleza pueden reprimir la falsificacion de documentos privados que representan por lo comun un gran interés; no así la de documentos como los billetes de Banco, para la que los estímulos son en sumo grado poderosos, porque una falsificacion puede proporcionar á los delincuentes una fortuna considerable, inmensa. Y si á esto se agregan las dificultades de la comprobacion, habremos de convenir en que la gracia concedida ha sido un presente peligroso, porque ella, no hay que dudarlo, producirá la ruina del establecimiento.

33. No sería tampoco pequeña dificultad la que ofrecerian los billetes, si se emitieran y se les diese valor legal, sin embargo de no deber ni poder considerarse el nuevo Banco sino como una empresa particular, como una simple asociacion de negociantes. Tal sería la de no haber reglas conocidas para determinar las responsabilida-

des de los que den y reciban los tales billetes en circulacion comun. En los pocos países en que están permitidas al comercio estas cédulas, la ley, cual sucede en Holanda, ha determinado las acciones y responsabilidades que nacen de su admision, y por cierto que, siendo como son un papel de crédito de naturaleza singular, delicada y peligrosa, las reglas adoptadas son tambien singulares, y sin afinidad alguna con las admitidas para las otras clases de papel de crédito. Solo asi puede haber alguna seguridad en los tomadores y aun en los establecimientos mismos, y sin embargo, la plena garantía no ha podido fijarse todavia. Como en España condena la ley tales documentos, no ha establecido regla ninguna para su circulacion, ni determinado las acciones y obligaciones del trasmittente y del tomador. Cada billete en circulacion podria, pues, en la hipótesis hecha, ser un pleito vivo, y lo sería con el tiempo; y lo que es mas, un pleito incierto por falta de derecho establecido en la materia.

34. Lo espuesto justifica nuestro juicio respecto al ningun crédito que pueden tener los billetes del nuevo Banco, y lo poco que debe temer de esa gracia el de San Fernando; pero ya que no podemos aconsejar á la Junta que abandone los derechos del Establecimiento, nos propondremos examinar los remedios legales que le asistan para salvar aquellos. Nadie mejor que la Junta podrá juzgar con probabilidad de acierto si, por una esposicion razonada que se eleve al Gobierno, podrá conseguirse la revocacion de la concesion hecha al nuevo Banco. Si asi lo creyese y tuviera fundados motivos para esperarlo, este medio sería preferible á cualquiera otro. Pero si la Junta no lo estimase asi, ó no existiesen dichas probabilidades, el intentarlo hasta sería peligroso, ora por la demora del remedio jurídico, ora porque la sumision á la via gubernativa no fuese despues un obstáculo para la judicial. Una prudente circunspeccion no nos permite estendernos mas sobre este punto; debiendo solo añadir, que en el caso de que la Junta se decida á tantear los medios gubernativos, deberá protestar que se reserva usar de los judiciales, tanto para el caso de una adversa resolucion, como para el de una demora que perjudicase al Banco.

35. Suponiendo que es llegado el caso de acudir á los medios judiciales, dos son los que la ley señala para estas ocasiones: el restitutorio, esperando la Junta á que se realice la emision, ó el de amparo, previniendo el suceso. Ambos remedios son de los que llamamos interdictos posesorios, idénticos en sus resultados, que son los de fijar el estado de posesion de hecho, para que las partes usen de los derechos que les competan en juicio. La diferencia que entre ellos existe la determina el tiempo en que se entablan. Cuando

se espera á la perturbacion ó esta se realiza impensadamente, el interdicto restitutorio es necesario; pero cuando aquella se teme y no se quiere aguardar á que se consume, se acude al de amparo, para que el juez proteja la posesion del que la tiene con los requisitos legales.

36. Aunque en lo general abunden mas los interdictos de recuperar que los de retener, es porque es mas frecuente que las espoliaciones se realicen inopinadamente que el que puedan prevenirse con tiempo. Y aunque algunos haya que, sabedores del despojo que se les va á causar, permanezcan en silencio sin usar del remedio del amparo, esta conducta insidiosa no la aconsejaremos nosotros. La Junta, acudiendo oportunamente á un juez con la solicitud de que se la ampare en la posesion en que se halla contra el ataque que la amenaza de parte del nuevo Banco, puede hacer un servicio eminente á honrados comerciantes, que ajenos de las dificultades que ese establecimiento debe tocar entrarán de buena fe, esperanzados de conseguir una ganancia lícita y sin riesgos. Pero cuando sepan que hay una oposicion, que esta pende ante los tribunales, que el derecho del Banco de San Fernando no puede combatirse, ni el Gobierno llevar á efecto sus resoluciones en la materia, no aventurarán acaso sus capitales ni contribuirán á sostener esta lucha desesperada para el nuevo establecimiento. Esta consideracion la toman siempre en cuenta los tribunales, pues la buena fe lleva necesariamente la mejor parte en los litigios.

37. Reasumiendo, pues, creemos que el derecho del Banco de San Fernando á la emision privativa de cédulas al portador es indisputable; que este derecho no ha podido ni debido ser atacado ni afectado por el Gobierno por no estar en sus atribuciones el hacerlo, necesitándose una ley para alterar lo dispuesto en la real cédula de 1829; que los males que amenazan al Establecimiento por la concesion hecha en los estatutos del nuevo Banco que se ha erigido por real decreto de 25 de enero último, debe la Junta de Gobierno del de San Fernando precaverlos y evitarlos defendiendo los derechos de éste; y que el medio mas natural, mas noble, mas eficaz y espedito es el de acudir á los tribunales de justicia con los comprobantes correspondientes, pidiendo el amparo en la posesion esclusiva de emitir y circular cédulas al portador, de la que trata de despojarle el nuevo Banco, y solicitando al mismo tiempo que la interdiccion y amparo se publiquen en los papeles oficiales para conocimiento de todos.

Esta es nuestra opinion, fundada en los datos mencionados.

Madrid 16 de febrero de 1844.—*José María Monreal*.—*Manuel de Seijas Lozano*.—*Manuel Perez Hernandez*.—*L. D. Juan Gonzalez Acebedo*.—*José de Ibarra*.—*Felipe Gomez Acebo*.

Núm. 2.

Nota del pormenor de partidas que comprende la suma total de la deuda de la Real Hacienda acordada en transaccion.

Documentos en poder de la Direccion para entregarse á la Real Caja en reintegro de la transaccion.

Inscripciones del gran libro 1,250 de á 40,000 rs. cada una, fecha 1.º de Enero de 1827, números 2338 á 3587.....	50.000,000	
Intereses vencidos en las mismas desde 1.º de Enero de 1827 hasta 30 de Junio de 1829, que son dos años y medio, á 5 por 100.....	6.250,000	56.250,000

Documentos para inscribirse en el gran libro, á saber:

41.760,000	En 1044 láminas de á 40,000 reales, números 1839 á 2882, fecha 1.º de Enero de 1827.	
4,485 28	En 1 id. n.º 2883	} Fecha 1.º de Enero de 1827.
10,000 »	En 1 id. n.º 9385	
5,000 »	En 1 id. n.º 9386	} Fecha 1.º de Julio de 1828.
4,787 28	En 1 id. n.º 9387	

41.784,273 22

41.784,273 22

Intereses corridos que tienen en sí dichos documentos á 5 por 100 hasta 30 de Junio de 1829.

Sobre 41.764,485 28	{ Por 5 años desde 1.º de Julio de 1824..	10.441,121 10	
Idem, 19,787 28	{ Por 4 1/2 años desde 1.º de Enero de 1825	4,452 4	52,229,847 2

Documentos de deuda sin interés á saber:

1.098,191	26	1 n.º	13,610	Fecha 1.º de Abril de 1826.
79,868	16	1 n.º	13,611	
359,408	7	1 n.º	13,612	
209,753	14	1 n.º	13,613	
149,753	14	1 n.º	13,614	
119,802	25	1 n.º	13,615	
27,967	4	1 n.º	13,616	
99,835	20	1 n.º	13,617	
1,397	23	1 n.º	13,618	
3,494	8	1 n.º	13,619	
9,664	2	1 n.º	13,620	
16,033	20	1 n.º	13,621	
10,981	31	1 n.º	13,622	
239	25	1 n.º	13,623	

4.121,333	28	1 n.º	19,454	Fecha 1.º de Julio de 1826.
5.211,978	31	1 n.º	19,455	

1.980,000	"	1 n.º	2,007	Fecha 1.º de Enero de 1825.
198,000	"	1 n.º	2,008	

279,671 6 4 núms. 711 á 714 fecha
1.º de Enero de 1825
á 69,917 rs. 27 mará-
vedis cada uno.

279,671 6 5 núms. 700 á 704 id. id.
id. á 55,934 id. 8 id.

349,424 19 7 núms. 715 á 721 id. id.
id. á 49,917 id. 27 id.

239,605 14 6 núms. 705 á 710 id. id.
id. á 39,934 id. 8 id.

309,108 9 47 recibos de intereses de
vales de varios años y
creaciones, carpetas nú-
meros 1 y 2.

9,893 18 1 n.º 36,149 fecha 1.º de
Julio de 1828.

1.380,000 " 69 núms. 35,922 á 35,990
id. id. á 20,000 reales
cada uno.

10,000 " 1 n.º 35,901 id. id.

9,397 8 1 n.º 35,872 id. id.

343,518 14 1 n.º 25,715 fecha 1.º de
Octubre de 1827.

90 9 1 n.º 32,444 } 1.º de Abril

45 4 1 n.º 32,443 } de 1828.

16.908,129 27

16.908,129 27

*Depósito en Madrid por Dominguez y otro
en Granada, á saber:*

Un libramiento dado en 8 de Octubre de 1810 por D. Leon de Sagasta contra la tesorería mayor de S. M. en favor del Banco, pagadero mitad en vales y mitad en metálico, procedente de un depósito perteneciente á D. José María Dominguez..

25,667 23

Una certificación fecha en Granada á 19 de Junio de 1822, procedente de entrega que hizo el comisionado del Banco en aquella ciudad por vía de depósito en 10 de Junio de 1808.....

5,897 26

31,565 15

Dos letras libradas en Cadiz en el año de 1818 á cargo del Real Giro endosadas al Banco, protestadas falta de pago, segun los testimonios que las acompañan, de cuyo principal y gastos, deducidas varias cantidades percibidas á cuenta, queda un líquido á favor de este establecimiento de..

169,780 18

Otras varias partidas incluidas en la liquidación, de que no hay documento.

Importe de una certificación dada por la Tesorería general con fecha de 10 de Agosto de 1822 número 128, procedente de la cuenta de canales de Manzanares y Guadarrama liquidada hasta 31 de Diciembre de 1814, la cual se halla presentada para su reconocimiento.....

11.265,029 12

Intereses sobre esta partida á favor del Banco á 5 por 100, desde 1.º de Enero de 1815 á 30 de Junio de 1829.....

8.167,146 8

19.432,175 20

Importe de 5 libranzas sobre Lima pagaderas en los dias 15 de Marzo de los años de 1805 al 1809 inclusives, las cuales son parte de las 24 que el Gobierno entregó al Banco con fecha de 15 de Marzo de 1802, bajo la que se le abonó su total importe segun resulta de cuentas presentadas, y ahora se le carga el de estas 5 por no haber sido realizadas, ascendiendo este crédito en 31 de Diciembre de 1814 á

24.377,765

Intereses sobre esta partida de catorce años y medio á 5 por 100 desde 1.º de Enero de 1815 á 30 de Junio de 1829.....

17.673,880

42.051,645

Documentos de varias especies entregados por el Banco en pago de fincas compradas.	81.296,902	8
Documentos de deuda con interés y sin él por mitad que en 20 de Marzo de 1823 entregó el Banco al crédito público en reintegro de 5,498 acciones de este establecimiento, las cuales se están devolviendo á sus respectivos interesados en virtud de reales órdenes.....	12.095,610	2
Diferencia contra el Banco pendiente de la liquidacion hecha por la Real Caja de la inscripcion de los 50.000,000 de rs. procedente de 137.714,729 rs. y 11 mrs. que el Banco tiene reclamada.....	29.209,978	5
Diferencia entre 135 rs. y 13 mrs. de documentos sin interés recogidos de la Real Caja, y 485 rs. y 4 mrs. á que ascienden cuatro recibos de intereses de vales que se la tenían presentados para su reconocimiento, incluidos en un resguardo de mayor suma, número 1,545.....	349	25
	<hr/> 309.475,983	<hr/> 20

Madrid 13 de Agosto de 1829.—*Vicente Gneco*.—V.^o B.^o de la Direccion.—*Muguero*.—*Perez*.—He recibido del Banco Nacional de San Carlos dos mil cuatrocientos sesenta y cinco documentos, importantes ciento ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil noventa y nueve rs. y cinco mrs. vn., cuyo pormenor resulta de las partidas de esta nota que espresan venir acompañadas de los documentos respectivos, quedando en esta oficina un duplicado del presente estado. Y para que sirva de resguardo lo firmo en Madrid á 7 de Octubre de 1829.—*Victoriano de Encima y Piedra*.

Num. 3.

Ministerio de Hacienda.—Excmo. Sr.—El Rey N. Sr. se ha servido mandar recomiendo á V. E. con la mayor eficacia que se haga un balance perfecto de todas las existencias, créditos, derechos y débitos del Banco nacional de San Carlos, y que la Junta de gobierno del mismo se ocupe mucho en examinar los medios de regenerarlo, y los proponga en efecto despues de haber empleado la mas profunda meditacion; en inteligencia de que S. M. por su parte está dispuesto y desea restablecer este cuerpo y darle nueva vida para bien general del Estado y utilidad de los accionistas. De real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes á su cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1828.—*Luis Lopez Ballesteros*.—Sr. Marqués de Valmediano.—Es copia.—P. I. del Secretario del Banco, *Antonio Guillermo Moreno*, Síndico.

Num. 4.

Don Manuel Gonzalez Allende, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III, del Consejo de S. M., su secretario, del Banco Español de San Fernando, su letrado consultor, y encargado de la liquidacion del estinguido Banco nacional de San Carlos.—*Certifico*: que la Junta general de accionistas del Banco nacional de San Carlos celebrada en 30 de agosto de 1828, autorizó unánimemente y por aclamacion á la de gobierno del mismo establecimiento: 1.º para celebrar con el Gobierno de S. M., en los términos mas favorables y posibles que la dicte su celo en beneficio del establecimiento, una transaccion por la cual el Banco haga cesion de todos sus derechos, créditos liquidados y sin liquidar y reclamaciones pendientes sobre estos objetos con la real hacienda por una cantidad alzada en metálico que se perciba desde luego; y 2.º para disponer y arreglar cuanto convenga á la regeneracion del mismo establecimiento, cuyo resultado pondrá oportunamente en noticia de los Sres. accionistas. Y para que asi conste donde convenga espido la presente, auto-

rizada con el V.º B.º de la Direccion y sellada con el del Banco en Madrid á 22 de febrero de 1844.=V.º B.º de la Direccion.=*José Segundo Ruiz.* = Es copia. = Por I. del Secretario y como Síndico de real nombramiento , *Antonio Guillermo Moreno.*

Tituu. 5.

Ministerio de Hacienda de España =Copia del convenio de transaccion celebrado entre los comisionados por S. M. y los comisionados por el Banco de San Carlos.=Los Sres. D. Gaspar de Remisa, director general del Real Tesoro, D. Antonio Martinez, contador general de la distribucion, y D. Victoriano de Encima y Piedra, director de la Real Caja de Amortizacion, nombrados por real orden de 3 de octubre último para conferenciar con la administracion del Banco de San Carlos, y transigir por una cantidad alzada los créditos que tiene el mismo contra el real Erario, de una parte; y de otra los Sres. D. Justo José Banqueri, D. José Garay, D. José Fagoaga y Dutari y D. Manuel Gonzalez Allende, los tres primeros individuos de la Junta de gobierno y el último secretario del mismo Banco, autorizados para el efecto por la espresada Junta de gobierno, con arreglo al acuerdo de la general de accionistas celebrada en 30 de agosto del año próximo pasado; penetrados todos como S. M. de la necesidad de dicha transaccion, y de la imposibilidad de que aquel establecimiento pueda corresponder á las miras de utilidad para que fue instituido si no se le facilita una cantidad en metálico suficiente para sacarlo de su actual nulidad, y no se erige el Banco sobre bases mas propias á su prosperidad, despues de varias reuniones ha acordado lo siguiente :

ARTICULO 1.º Quedan transigidos por una cantidad fija de cuarenta millones de reales vellon todos los créditos que bajo cualquier título y denominacion correspondan al Banco de San Carlos contra el Estado, ó sea la Real Caja de Amortizacion, encargada de atender á sus acreedores.

ART. 2.º Están comprendidos en esta transaccion los cien millones de reales de capital, ó sean cinco millones anuales de renta que en favor del Banco de San Carlos se mandaron inscribir en el gran libro de la deuda consolidada por real orden de 30 de abril de 1824, que hasta ahora solo ha tenido efecto en cuanto á cincuenta millones de capital; todos los demás créditos en inscripciones, certificaciones

ú otra especie de documentos que existen en esta fecha en poder del Banco de San Carlos, ó le pertenecen de la clase referida, así como todas sus reclamaciones, que según la nota que ha formado y se ha tenido á la vista importan en junto una suma de trescientos nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y tres reales y veinte maravedís vellon, parte reconocida y liquidada, y parte por reconocer y liquidar: están comprendidos en fin todos y cualesquiera otros créditos que á mas de los referidos parecieren en adelante en favor del Banco y contra el Estado, de manera que hasta la fecha presente quede saldada y definitivamente cancelada toda cuenta pendiente entre el Banco y el Estado ó la Real Caja de Amortizacion, renunciando ambos establecimientos á toda reclamacion instaurada ó que pueda instaurarse desde luego que el uno reciba los cuarenta millones de reales de vellon en efectivo, y el otro recoja los documentos de crédito y finiquitacion que deberá hacer de las partidas de que no los tenga y produce por cuenta.

ART. 3. Los cuarenta millones referidos de la transaccion se invertirán en acciones del nuevo Banco, que bajo el mismo nombre con la organizacion conveniente, y con total separacion de sus negocios con los del actual, se propone S. M. erigir desde luego, para que los interesados y la nacion toda participen cuanto antes de las ventajas que ha de producir un establecimiento de esta clase.

ART. 4. El Banco procederá á la liquidacion de todos sus negocios pendientes, cesando á este efecto en todas sus operaciones de descuento y demás que no se dirijan á liquidar; y pasará los fondos resultantes de su liquidacion en cuenta corriente al nuevo Banco, disponiendo de las cantidades que necesite para acudir á sus obligaciones pendientes, y al ulterior destino que le convenga dar á lo que le sobre.

ART. 5. El presente convenio no tendrá efecto hasta que recaiga sobre él la aprobacion de S. M., y hasta que se halle establecido el nuevo Banco.—Madrid 23 de junio de 1829.—*Gaspar Remisa*.—*Victoriano de Encima y Piedra*.—*Antonio Martínez*.—*Justo José Banquero*.—*José de Garay*.—*José de Fagoaga y Dutari*.—*Manuel Gonzalez Attende*.—Es copia del original aprobado por S. M. en esta fecha.—Madrid 9 de julio de 1829.—*Luis Lopez Ballesteros*.—Es copia.—P. I. del Secretario del Banco, *Antonio Guillermo Moreno*, Síndico.

Títu. 6.

Ministerio de Hacienda de España.—Al Presidente de la Junta de gobierno del Banco de San Carlos digo con esta fecha lo que sigue.—Habiendo dado cuenta al Rey N. Sr. del convenio celebrado en 23 de junio de este año, entre la comision que S. M. habia nombrado en 3 de octubre del anterior para transigir por una cantidad alzada con el Banco de San Carlos los créditos liquidados y por liquidar que tenia contra el Estado, y la que al mismo efecto habia nombrado la Junta de gobierno del Banco en uso de las facultades que le fueron cometidas por la general de accionistas en acuerdo de 30 de agosto del año último; y condescendiendo S. M. con los deseos que la misma Junta de gobierno tiene manifestados repetidamente desde su esposicion de 30 de julio, en que propuso formalmente dicha transaccion como medida indispensable y benéfica para el Banco en el estado en que se encuentra; despues del examen detenido que S. M. ha hecho de todos los antecedentes de este negocio, y movido su Real ánimo por la justa consideracion que le merecen los servicios que el Banco de San Carlos prestó al Estado en distintas épocas, conciliando al mismo tiempo estos con la necesidad de fundar sobre bases acertadas y conformes con los verdaderos principios de la economía social el establecimiento de descuentos, préstamos y depósitos, que es su soberana voluntad se erija en esta corte, ha venido S. M. en aprobar el espresado convenio y transaccion, y mandar que se lleve á puro y debido efecto todo su contenido.

En consecuencia de ello quedará el Banco de San Carlos pagado y satisfecho de todos los créditos que por cualquier título, origen y causa, y bajo cualquiera denominacion, le correspondan contra el Estado y todas sus cajas reales, comprendida la de Amortizacion, por la cantidad alzada de cuarenta millones de reales en efectivo, sin que bajo pretesto de omision, olvido ó falta de espresion pueda en ningun tiempo hacerse reclamacion de dichos créditos y acciones por el Banco contra el Estado, todo lo cual es conforme á los artículos 1.º y 2.º de dicha transaccion.

Estos cuarenta millones de reales entrarán directamente por cuenta del Banco de San Carlos en las inscripciones de veinte mil acciones de á dos mil reales cada una, que le corresponderán en

representacion de los espresados cuarenta millones de reales, segun lo convenido en el artículo 3.º de dicha transaccion.

El Banco procederá á la liquidacion de todos los negocios pendientes, cesando en todas sus operaciones de descuento y giro, y segun lo convenido en el artículo 4.º del convenio pasará al nuevo Banco en cuenta corriente los fondos que resulten de dicha liquidacion, disponiendo de las cantidades que necesite para acudir á sus obligaciones pendientes, y al ulterior destino que le convenga dar á lo que cobre.

En el momento que quede erigido el nuevo Banco se hará la espencion de las inscripciones por los espresados cuarenta millones, y al recibirlos la direccion del Banco de San Carlos por mano del director general del Real Tesoro, entregará todos los documentos de crédito que tenga contra el Estado, dando el finiquito de todas las cuentas, negocios y operaciones de todo género hechas hasta el dia.

Lo que traslado á V. S. de real orden para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de julio de 1829.—*Luis Lopez Ballesteros*.—Sr. D. Justo José Banqueri.—Es copia.—P. I. del Secretario del Banco, *Antonio Guillermo Moreno*, Síndico.

Núm. 7.

Ministerio de Hacienda.—Subsecretaría.—Teniendo en consideracion S. M. la Reina Gobernadora los distinguidos méritos y circunstancias que concurren en el Sr. D. Mariano Egea, consejero honorario de Estado, y deseando dar á ese establecimiento público una muestra del interés que toma en su fomento y prosperidad, poniendo á su frente sugeto dotado de las cualidades que exige el artículo 40 de la real cédula de 9 de octubre de 1829, se ha dignado nombrar al Sr. Egea comisario regio del referido establecimiento con las facultades que espresa la misma real cédula; siendo la voluntad de S. M. que en consideracion á los actuales apuros del Erario desempeñe esta comision gratuitamente, y solo perciba en su consecuencia el mismo sueldo líquido que actualmente disfruta como ministro cesante de Hacienda. De orden de S. M. lo comunico á V. S. para noticia del Banco y demás efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1837.—*Seijas*.—Sr. Presidente del Banco Español de San Fernando.—Es copia.—P. I. del Secretario del Banco, *Antonio Guillermo Moreno*, Síndico.

Ministerio de Hacienda.—Subsecretaria.—En consideracion á los actuales apuros del Erario se ha dignado mandar S. M. la Reina Gobernadora en real orden comunicada á V. S. por separado en esta fecha que el Sr. D. Mariano Egea, nombrado comisario regio de ese establecimiento, desempeñe esta comision gratuitamente, y solo perciba en su consecuencia el mismo sueldo líquido que actualmente disfruta como ministro cesante de Hacienda. Mas no considerando arreglado S. M. que se alteren las disposiciones de la real cédula de 29 de octubre de 1829 á pesar de lo espuesto por el Banco en representacion de 7 de noviembre último, acerca del honorario que el artículo 41 de la misma señala á dicha comision, se ha dignado mandar que para su cumplimiento abone el Banco al Sr. Egea su actual sueldo líquido espresado, y al Tesoro público la diferencia hasta los sesenta mil reales á que asciende el referido honorario; cuya diferencia tendrá ingreso en el mismo Tesoro mensualmente como un producto del descuento gradual establecido en real decreto de 19 de setiembre de 1836. De real orden lo comunico á V. S. para inteligencia del Banco y demás efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1837.—*Seijas*.—Sr. Presidente del Banco Español de San Fernando.

Ministerio de Hacienda.—Subsecretaría.—Excmo. Sr.—Enterada S. M. la Reina Gobernadora de la esposicion de V. E. en que, á nombre de la Junta de gobierno de ese establecimiento, solicita se derogue la real orden de 5 de diciembre último en la parte que previene abone el Banco al Tesoro público la diferencia que resulta entre el sueldo líquido de ministro cesante de Hacienda que disfruta V. E. y el de sesenta mil reales señalado al destino de comisario regio, se ha servido mandar que no entregue el Banco al Tesoro la diferencia espresada hasta que recaiga la resolucion conveniente sobre las nuevas propuestas que ha dirigido á este ministerio la Junta general de accionistas. De real orden lo digo á V. E. para inteligencia de la Junta de gobierno y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de marzo de 1838.—*Alcázar Mon.*—Sr. Comisario regio del Banco Español de San Fernando.

La Junta general de accionistas del Banco Español de San Fernando celebrada en 1.º de marzo de 1838, aprobó y sometió entre otras á la soberana aprobacion de S. M. la proposicion siguiente.—Que se suplique á S. M. se digne declarar que la comisaria regia del Banco se sirva en adelante como una comision honorífica con la gratificacion de 20.000 rs. vn. anuales; y de consiguiente que el sueldo

de 60.000 rs. señalados en el artículo 41 de la real cédula quede reducido á la gratificación indicada, sin perjuicio de que el Excmo. Sr. D. Mariano Egea, digno y actual presidente, continúe gozando mientras permanezca de comisario regio el haber que por su destino anterior le señalan las reales órdenes de 5 de diciembre último, época de su nombramiento. La real orden de 11 de noviembre del mismo año que aprobó los acuerdos de dicha junta general, contiene entre otros el artículo que dice así: Que el Banco continúe abonando al Sr. D. Mariano Egea, actual comisario regio, su sueldo líquido como ministro cesante de Hacienda, conforme está mandado por real orden de 5 de diciembre de 1837.

Ministerio de Hacienda.—Subsecretaría.—Excmo. Sr.—La Regencia provisional del reino se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto siguiente: “La Reina Doña Isabel II y en su real nombre la Regencia provisional del reino, en uso del artículo 38 de la real cédula de 9 de julio de 1829, ha venido en nombrar comisario regio del Banco Español de San Fernando á D. Ramon Gil de la Cuadra, del Consejo de Estado constitucional, quedando satisfecha del celo con que ha desempeñado igual destino D. Mariano Egea, tambien del Consejo de Estado constitucional. Tendréislo entendido y dispondreis su cumplimiento.” De orden de la misma Regencia lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1840.—*Agustín Fernandez de Gamboa*.—Sr. Comisario regio del Banco Español de San Fernando.

Ministerio de Hacienda.—Subsecretaría.—Enterada la Regencia provisional del reino de la consulta que V. S. dirigió á este ministerio en 4 de este mes por acuerdo de la Junta de gobierno de ese Banco acerca del sueldo que corresponde al Sr. comisario regio del mismo, nombrado por decreto de la Regencia de 30 de noviembre próximo pasado, se ha servido resolver que sea el de 60.000 reales anuales que señala el artículo 41 de la real cédula de creación de 9 de julio de 1829, respecto á que ella forma la ley y el contrato en cuya virtud existe el Banco, y sus disposiciones deben cumplirse. De orden de la Regencia lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de diciembre de 1840.—*Agustín Fernandez de Gamboa*.—Sr. Con-siliario mas antiguo de la Junta de gobierno del Banco Español de San Fernando.—Es copia.—P. I. del Secretario del Banco, *Antonio Guillermo Moreno*, Síndico.

de 60.000 rs. señalados en el artículo 41 de la real cédula que
reducido a la cantidad indicada, sin perjuicio de que el Excmo.
Sr. D. Mariano Pizarro, como y actual presidente, continúe pagando
mientras permanezca en comisión de gobierno, el haber que por su destino
anterior le señalaban las reales órdenes de 6 de diciembre último,
y para de su nombramiento, la real orden de 11 de noviembre del
mismo año que aprobó las cuentas de dicho Junta general, continúe
cobrar sobre el artículo que sigue así: Que el Banco continúe abo-
nando al Sr. D. Mariano Pizarro, actual comisario regio, su sueldo
fijado como ministro auxiliar de Hacienda, con los años señalados
por real orden de 5 de diciembre de 1837.

Ministro de Hacienda.—Subsecretario.—Excmo. Sr.—Y he-
cho el presente del tenor de las expresadas cédulas, para que
decretos siguientes: 1.º La Reina, Doña Isabel II y su real consorte,
la Real Junta provincial del reino, en uso del artículo 38 de la real
cédula de 9 de junio de 1837, ha venido en nombrar comisario regio
del Banco de San Fernando a D. Ramón de la Cruz,
del partido de Toledo, con facultades, para que continúe abo-
nando con que ha de abonarse real decreto D. Mariano Pizarro, también
del partido de Toledo, con facultades, para que continúe abo-
nando su cumplimiento. De orden de la misma Real Junta en comi-
sion a V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios
pague a V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1840.

Comisario regio del Banco de San Fernando.—Sr. Comisario regio del Banco
de San Fernando.

Ministro de Hacienda.—Subsecretario.—Excmo. Sr.—Y he-
cho el presente del tenor de la cédula que V. E. dirige a este mi-
nisterio en la que me ha acordado de la Junta de gobierno de San
Fernando sobre el estado que corresponde al Sr. comisario regio del
Banco, acordado por decreto de la Real Junta de 20 de noviembre
último, acordado por decreto de la Real Junta de 20 de noviembre
último pasado, se ha resuelto resolver que sea el de 60.000 reales
anuales que cubra el artículo 41 de la real cédula de creación de
dicho Banco de 1837, respecto a que dicha forma la ley y el contrato
en cuya virtud creó el Banco, y que dicho Banco deba cumplir
de orden de la Real Junta en lo que V. E. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios pague a V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1840.

Comisario regio del Banco de San Fernando.—Sr. Comisario regio del Banco de San Fernando.

Comisario regio del Banco de San Fernando.—Sr. Comisario regio del Banco de San Fernando.